

« EL ALTÍSIMO NIVEL DE PARO ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA »

Manuel Chaves González
Presidente de la Junta de Andalucía



El altísimo nivel de paro es, con mucha diferencia sobre los demás, el principal problema de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según reconoce el Presidente de la Junta, Manuel Chaves González. El fuerte crecimiento económico registrado en los últimos años se encuentra ahora amenazado por la continuidad de la crisis económica internacional.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo Andalucía en estos momentos?

—La crisis económica general y la consiguiente desaceleración del proceso de crecimiento han producido en la comunidad autónoma andaluza unos efectos similares a los registrados en el conjunto de España, aunque posiblemente sus manifestaciones, aún siendo también graves, no alcancen los niveles de otras regiones españolas. Sin embargo, lo cierto es que existe una retracción de la actividad económica que implica un aplazamiento de la toma de decisiones de los agentes económicos y retrasa, por tanto, cualquier atisbo de recuperación.

En los últimos años, incluido 1992, Andalucía ha experimentado un crecimiento ligeramente superior a la media española. Este hecho está asentado y viene a recoger los resultados de una etapa de crecimiento que comienza aproximadamente, en 1985. Andalucía se ha beneficiado significativamente de este período de expansión, en el que la producción regional, con un crecimiento notable, ha permitido un aumento de los puestos de trabajo y un significativo avance.

—¿Cuáles son los principales problemas de Andalucía, sobre todo los que tienen unos rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—El principal problema de la comunidad autónoma andaluza, sin lugar a dudas y con muchísima diferencia sobre los demás, es el altísimo nivel de paro.

Los efectos de la desaceleración del proceso de crecimiento están teniendo una especial incidencia en el desempleo. El altísimo nivel de desempleo tiene unas raíces históricas profundas, que han subrayado la incapacidad del sistema productivo andaluz para absorber la oferta de trabajo. Esto ha provocado que Andalucía haya tenido, incluso en momentos de fuerte expansión de la actividad económica, en los que se ha generado mucho empleo, un nivel de paro relativamente elevado, superior a la media española. Las tendencias demográficas de los últimos años han puesto de manifiesto que aquellas regiones con mayores tasas de desempleo resultan ser, a su vez, las que registran mayores índices de natalidad. Esto, unido al cambio de signo en el saldo migratorio a finales de los años setenta, y a los niveles deficientes de la tasa de actividad, son factores que explican, en buena medida, el origen del elevado nivel de desempleo de Andalucía.

Pese a que paulatinamente se van reduciendo los déficit históricos en desarrollo e integración que Andalucía soporta respecto al conjunto de España, aún siguen pesando aspectos como la debilidad de la clase empresarial andaluza y la inexistencia histórica de una burguesía autónoma que configure un núcleo potente y poderoso en la economía andaluza. Asimismo, tradicionalmente, Andalucía ha carecido de bases para el desarrollo económico, de factores de producción, entre los que destaca la falta de infraestructuras de apoyo de las actividades económicas, que ha sido corregida sensiblemente en los últimos tiempos; pero se siguen necesitando mejoras y perfeccionamiento.

—¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas con las que se encuentra, en el momento presente, Andalucía?

—La sociedad andaluza se ha caracterizado históricamente por un menor nivel de formación. Esta situación ha sido corregida drásticamente en los últimos tiempos, lo que ha supuesto desde el alcance de la plena escolarización hasta el establecimiento de nuevas universidades y escuelas técnicas, medias y superiores, en todas las provincias andaluzas.

Las potencialidades de nuestra economía se encuentran, indudablemente, en la mayor productividad de algunos sectores, que debe radicar en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y en el abaratamiento de los costes de producción.

Uno de los aspectos especialmente positivos es su situación geográfica. Andalucía está en Europa, pero además sirve de puente con el Norte de África, articulando la comunicación entre dos áreas muy diversas y estando cercana a un mercado en expansión como es Marruecos. Su localización es atractiva, también, para la ubicación de sectores sociales que demandan mejor calidad de vida para su residencia.

Asimismo, la existencia de factores de producción no suficientemente valorados constituye otro aspecto destacable de Andalucía. Uno de ellos es su territorio, su clima; no solamente para el turismo, sino también porque esto posibilita el desarrollo de otro tipo de actividades.

Por otra parte, tampoco están suficientemente valoradas las capacidades de creación y formación de su población; la juventud de su población, que presenta una pirámide ancha en la base, a diferencia de otros países y regiones, supone una potencialidad de empuje muy significativa.

En cuanto a los puntos débiles, podemos señalar: la citada falta de una clase empresarial que vertebré, intensifique y autocentre suficientemente la capacidad productiva de Andalucía; la dependencia real con las economías española y europea; la estrechísima vinculación y el impacto que genera cualquier alteración en la economía del entorno en Andalucía, y la existencia de algunos sectores inmaduros o menos productivos que, necesariamente, han de sufrir un proceso de modernización.

En cualquier caso, la mayor amenaza a la que se enfrenta Andalucía es la continuidad de la crisis económica internacional, que tiene unas consecuencias muy graves sobre el nivel de empleo. Por tanto, cualquier diseño de política económica para Andalucía ha de tener como referente este problema y, sobre todo, su carácter estructural. Para lograr un crecimiento del empleo en una economía de mercado abierta a la competencia internacional, la única vía posible es la expansión competitiva de las actividades productivas.

—¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía andaluza en esta nueva fase de ajuste?

—El gran reto al que se enfrenta la economía andaluza es la modernización de su actividad productiva; de la organización empresarial; de la producción, a través de la tecnología básicamente, y de la comercialización de las empresas. Esta modernización debe trasladarse al conjunto de la sociedad andaluza, adquiriendo pautas de comportamientos culturales en línea con los países de nuestro entorno, aunque sin detrimento de las singularidades de la cultura andaluza, extraordinariamente rica.

En el marco de creación de la unión económica y monetaria europea, la política económica regional debe mantener dos objetivos estrechamente vinculados entre sí: el aumento de la competitividad del sistema productivo y la aceleración de la convergencia con las economías europeas más desarrolladas, avanzando así en el objetivo básico de la política económica andaluza, que no es otro que el crecimiento estable y sostenido.

Las singularidades de la estructura productiva andaluza no permiten una opción sectorial exclusiva y excluyente. Considerando esto, en Andalucía se apuesta particularmente por el desarrollo industrial, sin menoscabo de los restantes sectores. Ciertas actividades de la industria andaluza pueden resentirse ante la competencia europea. Por ello, es necesario practicar desde Andalucía una política industrial y de apoyo a la actividad productiva que sea beligerante y que permita la convergencia real con Europa. La política industrial andaluza se sustenta en el carácter articulador, la contribución a la productividad y la capacidad innovadora, así como en la creciente dependencia de los restantes sectores tanto de la demanda industrial cuanto de los bienes por ella producidos.

A todo ello ha de contribuir la condición de región menos desarrollada —objetivo 1— con la que la Comunidad Europea ha catalogado a Andalucía, que le da la posibilidad de recibir unas cuantías crecientes de fondos estructurales, lo que ha de favorecer la modernización de la economía andaluza y, aunque no sea un factor determinante, ha de propiciar la convergencia de Andalucía con el resto de las regiones europeas.

« ESTAMOS SOPORTANDO LA CRISIS MEJOR QUE LA INMENSA MAYORÍA DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS »

Emilio Eiroa García
Presidente de la Diputación General de Aragón



Aragón está soportando la actual crisis económica mejor que la inmensa mayoría de las regiones españolas. Así lo afirma el Presidente de esta comunidad, Emilio Eiroa García, quien, pese a todo, reconoce la existencia de graves problemas derivados de los grandes desequilibrios internos de la Región. Su gobierno está dispuesto a dar un fuerte impulso a las políticas de modernización y de competitividad.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo Aragón en estos momentos?

—Los principales indicadores económicos de los últimos meses reflejan con claridad que la recesión económica española está afectando también a Aragón, aunque en menor medida que a otros territorios. El menor ritmo de crecimiento de nuestro PIB (del 5,4 por 100 en 1985 al 3 por 100 en 1991 y al 2,5 por 100 en 1992) demuestra, sobre todo, los problemas de la agricultura y también de algunos sectores industriales, tecnológicamente maduros y escasamente competitivos.

En general, estamos soportando la crisis mejor que la inmensa mayoría de las regiones españolas: pese al aumento hasta el 13,4 por 100, nuestra tasa de paro es la segunda más baja de España; el incremento de la renta personal fue el más alto durante 1991, aunque se deba parcialmente a nuestra decreciente población; nuestro IPC se mantiene por debajo de la media; gracias a su Plan Estratégico, General Motors sigue garantizando un alto número de exportaciones y el mantenimiento de su empleo en estos difíciles momentos; el Valle del Ebro sigue siendo la segunda zona de crecimiento, confirmándose como eje estratégico del crecimiento en el Sur de Europa, y Aragón aún mantiene algo del empuje que convirtió a nuestro sector industrial en el de mayor crecimiento durante el bienio 1989-1991.

No nos faltan motivos de preocupación; en especial, la agricultura, la carencia de servicios avanzados, la debilidad de nuestras PYME para modernizar su tecnología y competir... Sin embargo, sabemos que contamos con amplias oportunidades y posibilidades ante el reto europeo y que

si hacemos las cosas bien, podemos salir reforzados de la actual coyuntura. Creo que, aun con dificultades, podremos continuar acercándonos a la renta media comunitaria, completando el aumento de siete puntos ganados en la década de los ochenta.

—¿Cuáles son los principales problemas de Aragón, sobre todo los que tienen rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—Sin duda, nuestras principales dificultades derivan de los grandes desequilibrios internos, en todo lo que respecta a población y desarrollo. Por eso, el problema agrario que deriva de la política agraria común puede ser decisivo para Aragón, porque hablamos no sólo de un sector de nuestra economía, sino de la continuidad de nuestro mundo rural. Nuestra población activa en la agricultura —12 por 100, por encima de la media nacional (11), y sobre todo de la Comunitaria (5) o de la norteamericana (2)— está haciendo inevitable una cierta reconversión, pero tenemos que conseguir que no vaya demasiado lejos.

Entre nuestros problemas históricos destacan también las insuficientes infraestructuras, tanto en materia de comunicaciones o transportes como industriales o hidráulicas. Disponemos de recursos energéticos suficientes para generar desarrollo en las comarcas aragonesas; sin embargo, la política hidráulica o industrial del gobierno central nos está perjudicando notablemente. Sólo aprovechando en Aragón nuestros recursos hídricos podríamos crear industrias, agricultura de futuro y servicios suficientes para dinamizar nuestro extenso territorio.

Por otro lado, Aragón tiene problemas cuantitativos y cualitativos de capital humano. Nuestra estructura poblacional acusa uno de los porcentajes de envejecimiento más altos de toda la Europa comunitaria; y tres de cada cuatro aragoneses mayores de 18 años no han superado estudios de grado medio, por lo que, en gran medida, nuestro problema de empleo es una cuestión de formación y de adecuación del sistema educativo al productivo.

Nuestro extenso territorio podría ser una gran oportunidad, pero está operando como un problema estratégico porque encarece enormemente la prestación de los servicios públicos y la rentabilidad económica de las infraestructuras. Tenemos 729 ayuntamientos, muchos de ellos con muy pocos habitantes y un presupuesto que no supera los diez millones anuales. Desde la Comunidad Económica Europea y desde el gobierno central no están atendiendo ni los profundos desequilibrios internos ni las necesidades que plantea un territorio tan extenso. Así, la renta del corredor del Ebro ha hecho que la provincia de Teruel y varias comarcas de Huesca y Zaragoza quedaran fuera de los principales fondos estructurales, pese a ser zonas en clarísima regresión. Igualmente, en el Acuerdo de Financiación no se tiene en cuenta nuestra enorme extensión y las importantes inversiones que ésta exige, por lo que prácticamente recibimos el mismo dinero que si viviéramos todos en el centro del Valle.

Por todo ello, el proyecto del gobierno que presido pretende ser, antes que nada, un impulso de modernización económica y social de Aragón, para lo que hemos apostado sobre todo por políticas de infraestructuras y de re-

novación de nuestro tejido productivo; en este caso, a partir de mejora tecnológica y en materia de recursos humanos. Trabajamos también para vertebrar el territorio a través de una adecuada ordenación y organización territorial, y garantizando una calidad de vida suficiente en el Aragón urbano o rural.

En cualquier caso, sin vida económica difícilmente podrá sobrevivir nuestro mundo rural. Por eso, tenemos en marcha políticas de modernización del sector agrario, pero sobre todo apostamos por proyectos integrales de desarrollo que nos permitan articular un modelo descentralizado que reparta la actividad económica por toda la Comunidad Autónoma, a partir de los recursos endógenos y de unos buenos equipamientos e infraestructuras. Confiamos mucho en las posibilidades que nos abre la agroindustria, sobre todo si sabemos cuidar la calidad y generar estructuras adecuadas de comercialización.

—¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas, que se encuentra en este momento Aragón?

—Unos y otros quedan perfectamente delimitados en el «Plan Estratégico de Aragón, un Proyecto Global de Región», que, además de recoger las principales fortalezas y debilidades de Aragón, propone un completo cuadro de actuaciones a desarrollar en el horizonte del año 2000. Una vez diseñado el marco y fijados los objetivos, ahora estamos traduciendo esas propuestas de actuación a acción de gobierno, a política presupuestaria y a gestión política.

En concreto, aparecen como grandes oportunidades la diversificación de la industria, la proximidad a un gran eje de desarrollo europeo (Mediterráneo), la ubicación estratégica y la disponibilidad de espacio físico. En menor medida, contamos también, como ventajas competitivas, con los escasos problemas de reconversión industrial (cuenca minera, Sabiñánigo...), la disponibilidad de recursos financieros, la accesibilidad a Aragón desde el entorno nacional, la infraestructura en materia de telecomunicaciones, la existencia de suelo urbanizado y la calidad del medio ambiente rural y urbano.

Sin duda, Aragón goza de una situación privilegiada, no en vano es puerta central a Europa para toda la Península Ibérica, nexo necesario para los ejes Atlántico y Mediterráneo y centro del Valle del Ebro. Zaragoza, por su parte, se encuentra muy próxima y bien conectada con todo el área mediterránea, uno de los ejes de mayor concentración de la riqueza.

—¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía aragonesa en esta nueva fase de ajuste?

—En materia económica, nos parece prioritario hacer realidad nuestra proximidad a Europa y rentabilizar nuestra estratégica ubicación, aprovechar la crisis económica para renovar nuestro sistema productivo, crear las infraestructuras de comunicaciones e hidráulicas suficientes para generar riqueza en Aragón, dotar de cualificación a nuestros recursos humanos, internacionalizar adecuadamente nuestra economía y consolidar en todo Aragón un modelo descentralizado de crecimiento.

Contamos con energía de calidad y barata, puesto que poseemos agua y recursos energéticos, como carbón, gas y electricidad. Nuestras infraestructuras han mejorado en los últimos años y estamos trabajando intensamente para mejorar nuestra accesibilidad internacional y nuestra movilidad interior a corto plazo. Además del túnel de Somport, confiamos en la autovía que debe unir Francia con Huesca, Zaragoza y Teruel. Tenemos en marcha también un plan regional de carreteras que nos asegura una red radial competitiva. En materia de recursos humanos, disponemos de un buen sistema de ciencia y tecnología, una gran Universidad con más de 20.000 alumnos y una formación profesional cada vez más cualificada y adaptada al mercado laboral. A través de un plan cuatrienal de desarrollo tecnológico, estamos trabajando, también, para mejorar la oferta tecnológica de las empresas aragonesas, sobre todo de las pequeñas y medianas. Estamos impulsando, sobre todo, la creación de servicios avanzados de alto valor añadido y básicos en la nueva economía, sobre todo en materia de telecomunicaciones, electrónica o nuevas tecnologías. Tenemos en marcha un Programa de Promoción Exterior de Aragón que, pese a que ahora España compite en desventaja por la política económica del gobierno, está ya ofreciendo resultados en la internacionalización de nuestros mercados y en la captación de inversiones extranjeras.

En las comunidades autónomas del artículo 143, sufrimos limitaciones muy importantes para poder generar políticas de desarrollo y, en consecuencia, también de convergencia con Europa. Carecemos hasta ahora de competencias en materia de empleo, de educación, de formación, de posibilidades de diseñar una política económica propia, puesto que incluso se condiciona una gran parte de nuestras inversiones presupuestarias. Aún así, dentro de nuestras posibilidades, vamos a atender, principalmente, a la política de infraestructuras, de renovación tecnológica y de cualificación de recursos humanos.

La internacionalización de la economía y la competitividad han modificado profundamente las políticas de desarrollo regional, otorgando a las regiones nuevas posibilidades y responsabilidades que van más allá de la tradicional búsqueda del equilibrio intrarregional. En particular, el diseño y ejecución de acciones eficaces para lograr un hábitat acogedor y atractivo para las empresas multinacionales. De la misma manera, corresponde a esa política regional propiciar la integración de las empresas locales en el entramado de los grandes grupos de empresas y mercados internacionales.

Ese es el horizonte estructural en el que viene trabajando mi gobierno y al que deseáramos aplicar los recursos económicos de la Comunidad Autónoma. Pero como la coyuntura económica exige también respuestas rápidas a los problemas más graves, hemos constituido una «mesa industrial» con las principales organizaciones sociales para buscar acuerdos sobre siete aspectos: ayudas a empresas en crisis, plan de formación, infraestructuras industriales, innovación tecnológica, fomento de la investigación, comercio exterior y participación de los agentes sociales en organismos sociales. Confío en que, si conseguimos integrar recursos públicos y privados en estas prioridades, Aragón saldrá fortalecido de la crisis.

«MEJORAN LAS EXPECTATIVAS INDUSTRIALES Y CAMBIA EL MODELO ECONOMICO REGIONAL»

Antonio Trevín Lombán
Presidente del Principado de Asturias

El Presidente del Principado de Asturias, Antonio Trevín Lombán, observa una clara mejora de las expectativas industriales en su comunidad, tanto por la puesta en marcha de los planes de reindustrialización como por las inversiones que se derivan de proyectos tan importantes como los de Du Pont, Suzuki o Thyssen. Todo ello, en su opinión, comporta la incipiente configuración de un nuevo modelo económico regional, que hasta hace escasas fechas estaba dominado por la actividad industrial del Estado a través de Hunosa y Ensidesa.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo el Principado de Asturias en estos momentos?

—El Principado de Asturias vive en la actualidad una situación de reactivación económica, pese a la reordenación industrial que se está aplicando en sus sectores básicos, como son la minería pública (articulada en torno a Hunosa) y la siderurgia integral (protagonizada por Ensidesa). Sin embargo, tal proceso de modernización, de racionalidad y de mayores cotas de competitividad, ha generado la puesta en marcha de sendos programas de actuación, tanto en Hunosa como en Ensidesa, que afrontan los problemas del presente para superar las exigencias del futuro.

Además, tanto el Plan de Reindustrialización y Dinamización Económica de Asturias, aprobado por el gobierno de la Nación, como el Plan Integrado para la Reindustrialización de Asturias: 1992-1997, elaborado por el ejecutivo regional, representan unos instrumentos adecuados para lograr una plena modernización de la economía regional. Ambos planes se complementan y se convierten en unos firmes soportes para generar el dinamismo requerido para impulsar ese nuevo ambiente del que se habla en la pregunta formulada.

También se deben mencionar algunos ejemplos de las claras expectativas industriales que el Principado de Asturias ha merecido ya entre los inversores extranjeros. En los últimos tiempos, cabe destacar los proyectos empresariales protagonizados por multinacionales tan importantes, como Du Pont, Suzuki o Thyssen. Tales decisiones han representado un incipiente cambio radical en la configuración del nuevo modelo económico regional, hasta

hace escasas fechas prácticamente dominado por la actividad industrial del sector público.

—¿Cuáles son los principales problemas del Principado, sobre todo los que tienen rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado?

—Las características que definen la estructura económica del Principado de Asturias en las últimas décadas son sobradamente conocidas. En este sentido, la autarquía económica del franquismo ha prolongado su actividad y sus consecuencias negativas hasta fechas recientes. Es preciso reconocer que la consolidación del sistema democrático impidió abordar en la década de los años setenta los cambios que demandaba una economía tan atípica como la asturiana.

La principal consecuencia del retraso acumulado en el proceso de adaptación de nuestra economía a la realidad del mercado es el incremento de las dificultades que comporta la transformación. Así, hoy nos encontramos con menores plazos para ejecutar los cambios y una lógica mayor urgencia ciudadana en alcanzar los objetivos, lo que produce mayores tensiones y múltiples dificultades para mantener los equilibrios sociales y políticos que garantizan el éxito del proceso.

Así las cosas, el nuevo modelo económico, más competitivo e integrado, menos dependiente del sector público y más equilibrado en lo relativo a su composición sectorial, exige que se actúe en tres direcciones.

- La primera, articulando el Principado de Asturias territorialmente con el resto de la Nación, requisito imprescindible para superar el tradicional aislamiento que padece la Región. El Principado, limitado por la Cordillera Cantábrica y el mar, se comporta, en muchas ocasiones, como una isla. Se trata de romper ese aislamiento y acercar la Región al contexto comunitario en el que ya está integrado nuestro país.

- La segunda, vertebrando la Región, integrando todas sus comarcas de modo que se subsanen los desequilibrios espaciales y económicos existentes. Un objetivo prioritario es la consecución de una gran área «cuasi» metropolitana en la zona central de la Región, realidad que subyace en la propia naturaleza y disposición geográfica de la zona, pero que no ha podido realizarse hasta hoy debido a los desequilibrios y limitaciones existentes, fundamentalmente, en el área de infraestructuras.

- Y, en tercer lugar, promoviendo la reactivación de la actividad productiva de la Región y de su tejido industrial. Un buen ejemplo de ese nuevo dinamismo lo representan las inversiones, ya comentadas anteriormente, de las multinacionales Du Pont, Suzuki y Thyssen.

Los últimos meses han sido enormemente fructíferos para el desarrollo de la estrategia de superación de las limitaciones del anterior modelo regional y para la construcción de un nuevo modelo más moderno, competitivo, integrado y equilibrado. La aprobación del Plan de Reindustrialización y Dinamización Económica de Asturias, así como del Plan Integrado para la Reindustrialización de Asturias 1992-1997 han supuesto unos firmes puntales sobre los que se apoya la reactivación económica del Principado de Asturias.

—*Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas, que se encuentra en este momento Asturias?*

—El declive de la economía asturiana presenta la singularidad de iniciarse en plena etapa de expansión de la economía española en los años sesenta, con lo que no ha podido aprovechar plenamente el desarrollo experimentado aquélla en esos años.

La continuidad del ajuste industrial y la mayor incidencia de la crisis hacen que ésta prolongue sus efectos en el Principado hasta el momento actual, si bien existe una cierta fase de recuperación desde hace unos tres años.

Evaluando Asturias en su conjunto, es significativa la evolución de su valor añadido bruto (VAB) per cápita, que se situaba en 1987 en un 97,1 por 100 de la media nacional, mientras que en 1990 ese porcentaje descendía al 94,8 por 100. También se registró un bajo crecimiento del producto interior bruto (PIB). Por consiguiente, el modelo asturiano presenta fuertes desequilibrios y ha generado manifiestas condiciones discriminatorias negativas en el nuevo marco de economía abierta en el que se sitúa España, y cobra fuerza la imperiosa necesidad de superar los actuales estrangulamientos al desarrollo regional, que si bien fueron compatibles durante decenios con el modelo económico proteccionista, han sido generadores de desigualdades, por lo que requieren un esfuerzo sostenido y tenaz en el nuevo sistema de relaciones económicas.

La fase de transición que actualmente vive el Principado demanda una cooperación total entre las diferentes administraciones y con los agentes sociales.

Las expectativas de crecimiento dependerán de la eficacia con que se acierte en la actuación en los diversos escenarios que influyen en la economía regional.

—*Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía asturiana en esta fase del ajuste?*

—Los estados miembros de la CE menos prósperos (Grecia, Irlanda, Portugal y España) se beneficiarán, globalmente, en 1997 —merced al Fondo de Cohesión y a la participación financiera de los fondos estructurales con arreglo al objetivo número 1— de una dotación financiera que duplica el importe que recibieron el año pasado.

Recientemente se ha confirmado que el Principado seguirá siendo región objetivo número 1, lo que le permitirá acceder a los beneficios que se incluyen en las actuaciones previstas en el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht.

Las exigencias que impone la realización de la unión económica y monetaria obligarán al Principado a una estrecha coordinación de nuestra política presupuestaria con la del Estado, con el fin de contribuir a alcanzar los objetivos de convergencia que nos es imposible cumplir en 1997.

Desde el punto de vista del desarrollo regional, la confirmación por el Tratado de la Unión Económica de la política comunitaria y el reforzamiento de la cohesión permiten albergar fundadas esperanzas de que Asturias se beneficie de las actuaciones comunitarias encaminadas a reducir las diferencias de desarrollo existentes entre las regiones de la unión europea.

« ESTA CLARO QUE, SIENDO EL TURISMO LA ESPINA DORSAL DE NUESTRA ECONOMIA, AHI SE SITUA UN NUCLEO CRUCIAL DE PROBLEMAS »

Gabriel Cañellas y Fons

Presidente de la Comunidad Autónoma y Gobierno de las Islas Baleares

El Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Gabriel Cañellas, se muestra preocupado por la evolución de lo que es el principal recurso económico de la Región: el turismo. Su preocupación se debe tanto a la reciente crisis del sector como al resultado de las políticas estructurales de su gobierno, que sólo se irán advirtiendo con el paso del tiempo, y a los aspectos de política macroeconómica general que, estando fuera de su control, influyen sobremedida en el sector turístico (por ejemplo, la política de tipo de cambio).

—*¿Cuál es el ambiente económico que están viviendo las Islas Baleares en estos momentos?*

—El ambiente económico que vivimos es doble. Por una parte, constatamos la preocupación que los medios económicos experimentan ante la situación de la economía europea y de la economía española. Hemos de pensar que la economía balear es una economía absolutamente volcada hacia el exterior; no sólo por el abrumador peso del turismo, que de por sí sería suficiente razón, sino también porque se da la circunstancia de que nuestra industria tradicional es básicamente exportadora. Es decir, el ciclo económico internacional nos afecta profundamente, y este ciclo no atraviesa un buen momento. Pero, dicho lo anterior, constatamos, asimismo, que Baleares está respondiendo razonablemente bien ante las sacudidas del exterior; de tal manera que éso nos da un matiz de confianza en nosotros mismos, ante el futuro, que también caracteriza al momento actual.

—*¿Cuáles son los principales problemas de Baleares, sobre todo los que tienen rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?*

—Está claro que siendo el turismo la espina dorsal de nuestra economía, ahí se sitúa un núcleo crucial de problemas. La cuestión tiene interés dado que, con independencia de la evolución del ciclo internacional, se están produciendo cambios de carácter sociológico sobre los que debemos estar alerta y ser muy cuidadosos. Me estoy

refiriendo a los cambios, no siempre perceptibles, en las motivaciones de la clientela y en las exigencias del nivel de servicio. Ello coincide con una aproximación de precios a la cesta de la compra de nuestros mercados de origen y con la aparición de nuevos competidores. Todo ello se irá afianzando cada vez más conforme pasen los años, pues se trata de un proceso lento y un tanto difuso. Precisamente por ello, desde que accedimos al gobierno de esta comunidad autónoma en 1983, hemos ido desarrollando toda una serie de políticas estructurales, que siguen vigentes y que se van a continuar y completar, cuyos resultados, por la propia naturaleza de estas políticas, se irán advirtiendo con el tiempo.

—¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas, que se encuentran en este momento las Islas Baleares?

—Para nosotros hay un punto claramente débil, que es que la política macroeconómica está fuera de nuestro control: es un dato para nosotros. Y esa política puede ser muy negativa desde nuestra perspectiva. Un ejemplo de ello es la sobrevaloración del tipo de cambio y el empecinamiento de las autoridades en bandas y niveles voluntaristas, poco realistas. Esto ha contribuido a un encarecimiento artificial de nuestros servicios y productos, del que hemos sido agentes pasivos. Es, pues, un ejemplo evidente. Igualmente, la penuria financiera de esta Comunidad es otro factor que nos juega a la contra. No voy a reiterar aquí temas ya conocidos, pero está bastante asentada la idea de que en Baleares hay un gobierno escaso de recursos. Esto nos crea serias dificultades para la programación de políticas estructurales.

Desde otra perspectiva, un punto débil es nuestra acusada dependencia del exterior, que, unida a la insularidad, nos obliga a hacer esfuerzos suplementarios para acceder a los mercados. Aunque también hay que decir que ahí radica un punto interesante, dado que tenemos que ser especialmente competitivos, y ésta es la mejor simiente de la creación de riqueza.

En cualquier caso, la mayor amenaza es el período de cambios profundos que vivimos. Pero es una amenaza que, debidamente afrontada y asumida, puede ser la base del mantenimiento de nuestra prosperidad.

De hecho, el principal factor fuerte de Baleares es el dinamismo de su base humana; sin duda, aquí radica nuestro principal activo.

—¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía balear en esta nueva fase de ajuste?

—Hay un reto decisivo para nosotros: ser capaces de mantener nuestro nivel de vida y prosperidad en el contexto de las profundas turbulencias que afectan al mundo. Esto supondrá un trabajo intenso, tanto por nuestra parte —sector público autonómico— como por la parte de los demás agentes económicos. Los próximos años, cargados de dificultades en Europa, en España, en el Mediterráneo, nos presentan un desafío impresionante cuyas barreras creo que podremos franquear si mantenemos nuestras características de siempre: las ganas de trabajar, la prudencia y la confianza en la iniciativa privada.

« EL PROBLEMA MAS IMPORTANTE DE CANARIAS ES LA ELEVADA TASA DE PARO, QUE ALCANZA LIMITES INTOLERABLES »

Manuel Hermoso Rojas
Presidente del Gobierno de Canarias

Para Manuel Hermoso Rojas, que ha accedido recientemente a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, el problema del paro es el fundamental de las Islas, complementado y potenciado por una situación de incertidumbre empresarial debida a la falta de definición de las bases económicas del régimen económico y fiscal canario. Como aspectos positivos, señala una cierta recuperación de la demanda y la favorable evolución del sector servicios.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo Canarias en estos momentos?

—La Comunidad Autónoma vive en el momento actual un ambiente de crisis económica importante. Un nivel de paro que, según la EPA del 4.º trimestre, alcanza el 25,42 por 100 de la población activa, una inflación muy por encima de la media nacional (1,65 puntos por encima en el primer trimestre de 1993), se une a un sector primario en que la agricultura sólo presenta una faceta positiva en la exportación tomatera, con estancamiento de la platanera por la incertidumbre de la normativa de aplicación de la OCM que comienza en julio próximo. La industria muestra la atonía típica de una fase depresiva del ciclo económico, mientras que la construcción sigue inmersa en la recesión de los últimos años.

Aspectos positivos a señalar son una cierta recuperación de la demanda y una evolución favorable del sector servicios, verdadero motor de la economía canaria, lo que permite pensar en un crecimiento modesto del PIB, del orden del 1 por 100 a precios de mercado, en contraste con la recesión generalizada de la economía nacional.

A este comportamiento sectorial de la economía hay que añadir que existe una cierta incertidumbre empresarial debido a la falta de definición de las bases económicas del Régimen Económico y Fiscal canario.

—¿Cuáles son los principales problemas de las Islas Canarias, sobre todo los que tienen rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos tiempos para su solución?

—El problema más importante es la elevada tasa de paro, que alcanza límites intolerables. Desgraciadamente,

factores permanentes de carácter estructural condicionan la economía canaria. La Declaración 26 del Tratado de Maastricht hace patente esta realidad cuando señala que «la Conferencia reconoce que las regiones ultraperiféricas (departamentos franceses de ultramar, Azores, Madeira y las Islas Canarias) padecen un importante atraso estructural agravado por diversos fenómenos: gran lejanía, insularidad, escasa superficie, relieve y clima difíciles, dependencia económica respecto a algunos productos, cuya constancia y acumulación perjudican gravemente a su desarrollo económico y social».

Tan certero diagnóstico ha tenido aplicación en el diseño de la profundización de la integración de Canarias en Europa a través del Reglamento 1.911 del Consejo y en la Decisión POSEICAN, ambas de 26 de junio de 1991, que han permitido una integración que respeta, actualizándolas, las peculiaridades históricas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias reconocido y amparado por la Disposición Adicional Tercera de la Constitución Española. Desgraciadamente, en el ámbito español no se ha conseguido la misma comprensión de las autoridades estatales y aún tenemos pendiente las bases Económicas del REF canario, que ha sido motivo de conflicto con el gobierno del Estado y cuya solución, dentro de lo que hemos venido a denominar «pacto de Estado», es objetivo irrenunciable de nuestra política, que, por otra parte, sólo quiere que se plasme en la realidad lo que es un mandato del artículo 138 de la Comunidad Europea.

—*¿Cuáles son los puntos fuertes y amenazas con las que se encuentran, en el momento presente, las Islas Canarias?*

—Canarias tiene una población joven que es su principal recurso, ocupa una posición estratégica en la ruta de tres continentes, pero, a la vez, las dificultades derivadas de la insularidad alejada y de la deficiencia de infraestructuras determina una gran debilidad de la economía canaria ante el reto del mercado unido europeo.

La posición de ultraperifericidad augura, de no tomarse las medidas inversoras adecuadas, un panorama bastante oscuro donde el paro juvenil y de larga duración puede conducir a conflictos sociales graves y a la búsqueda de soluciones políticas poco moderadas. La dependencia externa de la actividad canaria, incluso en su actividad básica (el turismo), plantea la necesaria intervención estatal en los programas correctores de desigualdades sociales y de inversión infraestructural, en coordinación con la CE y la Comunidad Autónoma. Pero los canarios no nos conformamos con una economía de subvenciones, sino que queremos disponer de una política de incentivos económicos y fiscales que nos permita crear riqueza y ser los protagonistas de nuestro futuro con dignidad.

—*¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía canaria en esta nueva fase de ajuste?*

—El mayor reto de la economía canaria es el de su modernización y adaptación a un mundo competitivo. Si bien la apertura al exterior ha sido una característica histórica del Archipiélago, la necesidad de integración en uno de los grandes bloques económicos (la CE) plantea singulares problemas de adaptación para la supervivencia.

El sector pesquero está atravesando gravísimas dificultades derivadas, por una parte, de la pérdida de los caladeros tradicionales y, por otra, de las dificultades de acceso a los mercados europeos.

La agricultura tiene las oportunidades que le aporta la PAC y las especiales ayudas previstas en el POSEICAN, pero la amenaza de la competencia de los países norteafricanos a la producción tomatera y la incertidumbre sobre los detalles de aplicación de la Organización Común de Mercado del Plátano ensombrecen el panorama agrario.

La construcción necesita la inversión estatal en las infraestructuras. Es de justicia que se corrija el agravio que ha significado que Canarias haya quedado excluida del Plan de Carreteras del Estado, que ha desparramado más de dos billones de pesetas sobre el resto del territorio español. Los déficit que en instalaciones sanitarias tiene nuestra comunidad deben corregirse dentro de la solidaridad que debe impregnar la acción política. Sé que es difícil, pero los canarios aspiramos a que cuando se tomen medidas de carácter normativo, e incluso de pura gestión del ejecutivo, se haga una pausa y se considere cuál puede ser el efecto en una región tan diferente y singular como la nuestra. La CE ha adquirido ese compromiso en el POSEICAN; sólo queremos que el gobierno del Estado adquiera un compromiso similar. ¿Será pedir demasiado?

«HEMOS DE RESOLVER NUESTRAS DEFICIENTES COMUNICACIONES POR CARRETERA Y FERROCARRIL»

Juan Hormaechea Cazón
Presidente de la Diputación Regional de Cantabria



El Presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, considera que lo prioritario para su comunidad es resolver el desarrollo de las comunicaciones por carretera y ferrocarril con el resto de España, especialmente de la autovía Bilbao-Santander, cuya entrada en servicio estaba fijada para 1991. A ello puede contribuir el hecho de que, a partir de 1994, Cantabria podrá beneficiarse de los nuevos fondos de cohesión para grandes infraestructuras de la Comunidad Europea.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo Cantabria en estos momentos?

—La actual es una situación problemática dentro del conjunto nacional a la que Cantabria no permanece ajena. Aun a pesar de esto, el incremento del PIB de Cantabria ha estado por encima de la media nacional en 1992.

—¿Cuáles son los principales problemas de Cantabria, sobre todo los que tienen unos rasgos más permanentes?

—Consideramos que los problemas, en opinión de instituciones, entidades sociales y económicas y partidos políticos son, en general, los siguientes:

Deficientes comunicaciones por carretera y ferrocarril, declive industrial y la situación del sector ganadero, que se ha visto agravada por los efectos profundamente negativos de la adhesión española a la CE.

—¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—En materia de carreteras se han incumplido, y lo lamentamos públicamente, todos los plazos de construcción de la autovía Santander-Bilbao, si bien, en estos momentos, ya está construida, aproximadamente, la mitad, y el resto está en construcción. La autovía Santander-Oviedo solamente tiene construida una octava parte y el resto aún no está definida totalmente. Tampoco hay autovía de acceso a la meseta castellana, está definida hasta Reinosa, pero el resto solamente está en estudio.

En ferrocarriles no se ha hecho prácticamente nada, descartándose la terminación del histórico proyecto Santander-Mediterráneo. El sector industrial sufre el mismo declive que el que se produce a escala de todo el Estado y en la ganadería se ha dado un paso grande en la racio-

nalización del sector, pero se choca con una PAC opuesta frontalmente a los aumentos de producción. Actualmente, hemos recurrido las famosas cuotas lácteas determinadas por el gobierno central por ser discriminatorias para los intereses cántabros, y no renunciamos a seguir defendiendo un sector necesario para el equilibrio lógico de nuestra economía.

—¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas, con las que se encuentra Cantabria en el momento presente?

—Cantabria tiene una renta de situación que no ha sido convenientemente explotada. Situada entre dos regiones históricamente muy industrializadas, aunque hoy en regresión, y también muy contaminadas, es, al mismo tiempo, la salida natural de Castilla al mar. La calidad de vida de Cantabria es muy superior a la de las regiones limítrofes. Por otra parte, tiene una tradición industrial centenaria y una Universidad joven pero muy pujante.

Los puntos débiles se derivan, fundamentalmente, de nuestro histórico aislamiento, ocasionado por las malas comunicaciones terrestres que soportamos. La terminación de la autovía Bilbao-Castro Urdiales ya está repercutiendo favorablemente en la zona oriental de la Región y de estar terminada hoy en su totalidad, estaríamos contemplando una dinámica favorable en el conjunto regional.

Por último, la baja productividad del sector industrial también es una amenaza añadida para un sector en declive en toda la cornisa cántabrica.

—¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía cántabra en esta nueva fase de ajuste?

—En primer lugar, y como cuestión básica, resolver el problema de las comunicaciones, con las siguientes actuaciones:

- Terminación de la autovía Bilbao-Santander, cuya entrada en servicio estaba fijada para 1991.
- Autovía Santander-Asturias-Galicia (sin comenzar).
- Autovía Torrelavega-Reinosa (sin proyecto).
- Modernización del acceso a la Meseta por Burgos.
- Mejora y modernización de las carreteras:
 - Colindres a Espinosa de los Monteros.
 - Unquera a Potes, por el desfiladero de La Hermida.
 - Reinosa a Bilbao, por el pantano del Ebro.
- Construcción de la carretera Potes-Reinosa.
- Terminación de la red regional de carreteras, instrumento vertebrador del territorio regional, objetivo en el que la Diputación Regional ha realizado un gran esfuerzo.
- Mejora y ampliación del ancho de vía del ferrocarril Santander-Bilbao.
- Conclusión de todas las infraestructuras del puerto de Raos (Santander).

En segundo lugar, resolver definitivamente los problemas de abastecimiento de agua, saneamiento y reducción de residuos.

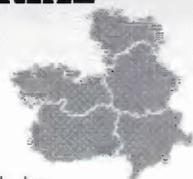
En tercer lugar, negociar e impulsar un plan industrial que facilite un determinado modelo de reindustrialización.

En cuarto lugar, terminar la reconversión ganadera por el camino ya iniciado de modernización de estructuras, mejora genética, instalaciones, formación, etc., y continuando en la lucha en contra de todos los aspectos negativos de la PAC.

Por último, centramos nuestras esperanzas en el objetivo de que Cantabria pueda beneficiarse a partir de 1994 de los nuevos fondos de cohesión (para grandes infraestructuras); a partir de ese año será, con toda seguridad, región de objetivo número 1 de la CE, con lo que se incrementarán grandemente los fondos estructurales que aquí llegarán y también se elevarán los topes de los incentivos regionales a la inversión. En este sentido, tenemos que manifestar que Cantabria fue excluida arbitrariamente de esos incentivos en 1988, cuando nuestras estadísticas aconsejaban y certificaban las ayudas del objetivo n.º 1 para la Región. Esa marginación y exclusión por razones políticas, que nunca olvidaremos por el daño que nos ha hecho, costó a Cantabria más de 20.000 millones en incentivos que debieron venir de Bruselas, pero el gobierno socialista optó por incluir a comunidades autónomas con gobiernos socialistas.

En todo caso, y mirando al futuro, con la colaboración y cooperación de todos, y con las bazas a nuestro favor, podemos, y debemos, invertir la tendencia de los últimos años y comenzar un periodo de crecimiento sostenido.

«CONTENCION DEL GASTO, INVERSION PUBLICA Y PACTO INDUSTRIAL SON LAS CLAVES DE NUESTRO DESARROLLO»



José Bono Martínez
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

José Bono Martínez se muestra especialmente satisfecho del fuerte crecimiento económico que ha registrado Castilla-La Mancha desde 1985 hasta 1990 y del cambio de estructura productiva que se ha realizado. Eso ha permitido suavizar el impacto de la caída de la actividad general que empezó en 1991. La contención del gasto público, la inversión en infraestructuras y el pacto industrial entre el gobierno autonómico y los agentes económicos y sociales son las claves del desarrollo de la comunidad autónoma.

Una región que mira a Europa

Castilla-La Mancha, desde el año 1985 —coincidiendo con el ciclo expansivo de nuestra economía que va hasta el año 1990—, ha crecido a ritmos superiores a la media nacional; concretamente, en este periodo, a una tasa media del 5 por 100. Además, se ha producido también una profunda transformación de la estructura productiva y de la estructura ocupacional, avanzando el peso relativo de los sectores secundario y terciario, convergiendo, consecuentemente, con las medias nacional y europea. La competitividad del aparato productivo regional fue del 4 por 100 (el 3,3 por 100 a escala nacional). Los indicadores de bienestar económico en Castilla-La Mancha muestran claramente que se ha producido un acelerado proceso de convergencia real con aquellas regiones de nuestro país más avanzadas. El agregado «renta familiar disponible» representaba un 82,1 por 100 de la media nacional en 1985 y pasó a representar un 87 por 100 en 1989, produciéndose también un crecimiento real anual acumulativo del PIB/hab. en este periodo de un 6,3 por 100 (5,7 por 100 a escala nacional).

En el año 1991 se observa, como es conocido, una desaceleración del crecimiento económico, consecuencia de la coyuntura económica recesiva de las principales economías de los países desarrollados. Sin embargo, una región como ésta que tradicionalmente, en los periodos de desaceleración económica, veía cómo sus estructuras productivas entraban en situación de profunda crisis y se crecía muy por debajo de las medias nacionales, ve cómo en este momento no se produce tal fenómeno, sino que

se siguen manteniendo tasas de crecimiento superiores o idénticas a la media nacional. En el bienio 1990-1991, la tasa real de crecimiento fue del 6,4 por 100 (el 6,3 por 100 a escala nacional). En 1992 ha continuado la desaceleración, tal como se observa en la evolución de los principales indicadores de la actividad económica y del mercado de trabajo; no obstante, el buen comportamiento experimentado por los sectores de servicios e industrial de Castilla-La Mancha ha producido un mayor crecimiento de la economía regional, demostrándose una mayor flexibilidad y adaptación a los efectos de la desaceleración económica. En definitiva, el hecho de que se haya modificado nuestra estructura productiva permite mayores garantías, tanto para afrontar los efectos negativos antes reseñados como para estar en una excelente disposición cuando se produzca la reactivación.

Ha sido importante también que en este ciclo económico expansivo que se ha producido en España desde el año 1985 Castilla-La Mancha haya mantenido una contención de los gastos de funcionamiento respecto al presupuesto, así como una contención del endeudamiento. Los gastos de funcionamiento representan en el presupuesto de 1993 únicamente un 18,77 por 100, mientras que los gastos de actuación suponen el 78,75 por 100; es decir, de cada 100 pesetas del presupuesto regional, se gastan casi 79 en favorecer el crecimiento económico y el bienestar social, lo que coloca a Castilla-La Mancha en el primer lugar en relación con este tipo de gastos. En lo que respecta al endeudamiento, nuestra política ha sido muy prudente. Castilla-La Mancha es una de las regiones menos endeudadas de todo el Estado. La carga financiera supone el 5,58 por 100 del total de gastos de los presupuestos para el año 1993. Estas dos políticas —poca aportación de los gastos de funcionamiento a la estructura presupuestaria y contención del endeudamiento— permiten que mantengamos un nivel de inversión pública con un crecimiento continuado y estable, así como el mantenimiento permanente de una política de gasto social basada en un aumento periódico de la solidaridad.

El Pacto Industrial

La mejora de nuestros niveles de desarrollo y bienestar económico, que se ha producido de manera indiscutible en este período pasado, unida al compromiso colectivo de fomentar nuevas vías de crecimiento, consolidar y aumentar nuestra actividad industrial y atraer nuevas inversiones empresariales, produce que todos tengamos mayor confianza en nuestro futuro económico. Esa confianza es la que ha propiciado que recientemente se haya producido un hecho de trascendental importancia para nuestro desarrollo futuro: la firma del Pacto Industrial, 1992-1995 entre sectores económicos y sociales (gobierno central, Universidad de Castilla-La Mancha, municipios, sindicatos, entidades financieras y empresarios). Este compromiso fue anunciado a la Región en mi discurso de investidura y respondía fundamentalmente al convencimiento de que aquello que hemos de afrontar para que Castilla-La Mancha sea más próspera y solidaria en el futuro hemos de hacerlo, evidentemente, juntos. Para ello, nuestras disparidades habrían de quedar enterradas por

el empeño común de perseguir un único objetivo: el progreso.

El Pacto Industrial se elaboró a partir de un documento base que redactamos y, con paciencia y esperanza, sometimos a conocimiento y debate de los agentes económicos y sociales. Entre todos, habríamos de encontrar el máximo común denominador de nuestras expectativas y nuestras concepciones en temas económicos y sociales; nuestra manera de ver la solución a los problemas de esta región. Y fuimos capaces de encontrar lo que a todos nos unía y establecer, por tanto, un compromiso a largo plazo sobre unas determinadas actuaciones que dinamizaran nuestra región.

En Castilla-La Mancha, todos apostamos por nuestro futuro. Estamos convencidos que con los conocimientos técnicos precisos, aprovechando suficientemente las potencialidades intrínsecas de estas tierras y manteniéndonos en los ejes de crecimiento en que nos hemos mantenido en estos últimos años (siempre por encima de la media nacional y comunitaria) podremos acercarnos a nuestra meta ideológica de progreso para todos los ciudadanos.

Superar los desequilibrios

Pero esta región, pese a los esfuerzos que todos hemos realizado en estos últimos años, tiene aún, lógicamente, problemas, desequilibrios, estrangulamientos, la mayor parte de rango histórico y que, como condición común, todos tenemos el empeño en hacer desaparecer: aún hemos de seguir reduciendo el diferencial de desarrollo respecto de la media nacional y comunitaria, continuar aspirando a los niveles de ocupación que permitan reducir la tasa de paro, insistiendo en la generación de nuevas actividades económicas, apoyando la competitividad de un tejido industrial en nuestra Región y, a la vez, lo que también es de suma importancia, ayudando a asegurar la viabilidad de actividades económicas de carácter tradicional. Nuestra ocupación tradicional, agrícola, ha de convivir con nuevas actividades enclavadas en ramas con alta intensidad de demanda y elevado contenido tecnológico.

En Castilla-La Mancha también se ha producido, como elemento fundamental de nuestra estrategia de desarrollo, un notable crecimiento de las infraestructuras económicas y sociales, consiguiendo así mejorar nuestra articulación espacial y determinar objetivamente la localización industrial. Estos elementos no sólo son necesarios para sentar las bases de un desarrollo económico futuro, sino también, y prioritariamente para nosotros, el crecimiento de las infraestructuras debe ser concebido como un instrumento de reequilibrio de las desigualdades sociales y un instrumento para la mejora del bienestar social.

El futuro

Miramos el futuro con esperanza y confianza en nosotros mismos. Sabemos que ya, definitivamente, esta región ha desterrado el atraso secular y la falta de medios para el desarrollo de sus ciudadanos; hemos desterrado entre todos la decepción histórica de ser ajenos, siempre, a la cabeza del progreso. Elementos que hasta hace poco

tiempo no suponían potencialidades reales de cara a la proyección futura de la Región ahora son factores que garantizan nuestra presencia inexcusable y necesaria en todo proceso de desarrollo: nuestra posición estratégica en las relaciones Norte-Sur/Este-Oeste se ha visto potenciada, sensiblemente, con las mejoras en las estructuras de comunicaciones (AVE, autovías, etc.), además de los mecanismos de incentivación a la inversión privada. En este sentido, tanto el gobierno central, como *la cohesión*, concepto que defendió e introdujo en el Tratado de la Unión Europea Felipe González a través de la política regional comunitaria, han sido elementos financieramente fundamentales para lograr algo que ha sido la superación de una deficiencia que históricamente ha yugulado el desarrollo en esta Comunidad.

La transformación estructural del aparato productivo regional no ha reasignado únicamente la producción desde el sector primario al resto del aparato productivo, combinado con un incremento de la productividad, sino que también ha flexibilizado y aumentado la capacidad de respuesta de nuestra estructura productiva a los retos del mercado común. Las PYME de nuestra región han sido en esta dinámica elementos fundamentales.

Hemos avanzado, por tanto, considerablemente. Hemos cambiado y avanzado en pocos años. También somos conscientes de que aún nos queda bastante para estar en el horizonte que deseamos. Y somos conscientes, asimismo, de las dificultades. Sabemos que nuestra región está, como otras, condicionada por el ajuste necesario de la economía española en el marco de la consecución de los objetivos de la unión económica y monetaria, y que ello implica modificar o mejorar algunos elementos de nuestro sistema productivo; la cualificación de la mano de obra, el desarrollo de la infraestructura terrestre y la diversificación de nuestro tejido productivo son aspectos en los que insistimos permanentemente. También, y aunque nuestras exportaciones se hayan multiplicado por 10 en los últimos años, hemos de aumentar su porcentaje sobre el PIB regional, aprovechando, por tanto, los efectos beneficiosos del proceso de integración en el mercado común.

Estamos empeñados en promocionar nuevas actividades productivas enclavadas en ramas de demanda fuerte y media, ya que esta región estaba relativamente especializada en ramas de demanda débil, relacionadas con los recursos productivos o con la mayor intensidad en el empleo del factor trabajo. La importancia de dichas ramas sobre el PIB y el empleo regional aún es considerable. Hemos, por tanto, de realizar un enorme esfuerzo de modernización y renovación tecnológica, máxime cuando el nuevo marco impuesto por el Tratado de la Unión Europea y la política fiscal que el mismo contiene imponen una optimización máxima de los recursos financieros, incrementando la efectividad de éstos.

« ESTUDIAMOS LA PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE DESARROLLO REGIONAL Y DE DINAMIZACION INDUSTRIAL »



Juan José Lucas Jiménez
Presidente de la Junta de Castilla y León

En Castilla y León se vive una situación de crisis generalizada, «igual a la del resto de España», según afirma su Presidente, Juan José Lucas Jiménez. Sin embargo, esta comunidad acusa con intensidad los ajustes y las transformaciones que afectan a la agricultura, a la minería, a la industria textil y al sector del pequeño comercio. El gobierno autónomo y los agentes económicos y sociales estudian la puesta en marcha de un plan de desarrollo regional y de un plan de dinamización industrial.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo Castilla y León en estos momentos?

—El ambiente no es ajeno a la situación de crisis generalizada que se vive en toda España. Los agentes económicos y sociales, y la propia Administración regional, son conscientes de la modificación en la fase del ciclo económico.

Este elemento es el primer paso para identificar la necesidad de establecer mecanismos de ordenación y preparación de la economía regional para la siguiente fase alcista.

En este momento, agentes e instituciones hacen balance de las características de la situación ante la que se encuentra Castilla y León, y manifiestan sus propuestas a medio plazo, que, en gran medida, son coincidentes entre sí, tanto en el diagnóstico y estrategias de actuación como en las acciones a ejecutar.

En el ámbito coyuntural, existen empresas y actividades que atraviesan momentos críticos sobre los cuales los diferentes agentes exigen actuación inmediata.

Sobre ambos aspectos se han establecido mesas de diálogo y negociación, cuyos avances no son homogéneos.

—¿Cuáles son los principales problemas de Castilla y León, sobre todo los que tienen unos rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—Los problemas económicos que afectan en mayor medida a la Comunidad se podrían agrupar en un doble ámbito: los sectoriales y los horizontales.

Desde la perspectiva sectorial, se encuentran en proceso de ajuste la agricultura, la minería, diversas actividades industriales y el comercio tradicional.

El principal problema agrario reside en la especialización en producciones continentales (cereales, remolacha, leche, etcétera) que son excedentes en la Europa Comunitaria, y que se ven afectadas por la PAC y los acuerdos del GATT. En este sentido, ha sido aprobado por la Junta de Castilla y León un Plan Estratégico Agrario tendente a mejorar la productividad de las explotaciones agrarias y las condiciones de vida en el medio rural.

La minería del carbón de Castilla y León, al igual que la europea, se encuentra ante dificultades para competir con otras fuentes de energía (petróleo, gas, etc.) que permiten operar a costes más reducidos. Recientemente, se ha aprobado un Plan de Actuación Minera para el periodo 1992-1995 por importe de 13.000 millones de pesetas, cuya finalidad es mejorar las condiciones de las exploraciones, fomentar las actividades alternativas en las cuencas mineras, crear infraestructuras de desarrollo en las mismas y mejorar la cualificación profesional de los trabajadores.

Determinadas actividades industriales, como la textil o la química, presentan dificultades que en determinados casos han sido abordadas mediante acuerdos sociales y el apoyo financiero de la Administración regional.

Finalmente, el comercio tradicional está en un proceso de ordenación ante el surgimiento de grandes superficies. La necesaria modificación de las estructuras tradicionales hacia un comercio más especializado y el apoyo a éste serán objeto de tratamiento en una próxima Ley de Comercio Interior.

Desde la perspectiva horizontal, las principales dificultades se hallan en la insuficiencia de determinadas infraestructuras y en la necesidad de introducir nuevas tecnologías.

—¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas, con las que se encuentra, en el momento presente, Castilla y León?

—Entre las principales ventajas podíamos citar:

- Disposición de recursos naturales de cierta importancia: carbón, uranio, espacio, etcétera.
- Elevada cualificación de la mano de obra, como consecuencia de cuatro universidades y la próxima apertura de la Universidad de Burgos.
- Propensión al ahorro superior a la media nacional.
- Considerable volumen de producción energética, lo que permite abastecer a otras áreas.
- Significativo potencial turístico, dado que en la actualidad comienzan a valorarse en mayor medida aspectos tales como el medio ambiente, la cultura, el patrimonio histórico-artístico y un conjunto de elementos que sitúan a la Región en una posición privilegiada en este ámbito.

Por lo que respecta a las dificultades, estas ya han sido analizadas en la pregunta anterior.

—¿Cuáles son los grandes retos y objetivos de la economía castellano-leonesa en esta nueva fase de ajuste?

—La economía regional está inmersa en un proceso de modernización cuya finalidad es mejorar la competitividad de las estructuras productivas y adaptar éstas a las condiciones del mercado europeo.

En esta línea se encuentra el proceso de negociación con los agentes económicos y sociales del Plan de Desarrollo Regional 1994-1999 y del Programa de Dinamización Industrial.

Entre las principales actividades de promoción económica a desarrollar en los próximos años cabe citar:

- Apoyos financieros a las pequeñas y medianas empresas.
- Creación de la Agencia de Desarrollo Regional de Castilla y León, con el fin de dinamizar el tejido industrial de la Comunidad mediante instrumentos de titularidad pública.
- Dotación de recursos financieros específicos para acciones de industrialización.
- Innovación científica y desarrollo tecnológico.
- Promoción comercial y fomento de la exportación.
- Apoyo a las empresas familiares y a la industria de artesanía.
- Desarrollo de la cultura de la calidad total mediante un programa regional de calidad.
- Formación tanto de empresarios como de trabajadores.

« NECESITAMOS UN ENTORNO POLITICO-ECONOMICO QUE SEA FAVORABLE A LA INDUSTRIA »

Jordi Pujol i Soley
Presidente de la Generalidad de Cataluña

Para el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, el país necesita en estos momentos un entorno político-económico que sea favorable para la industria. Por ello, en su opinión, no puede repetirse el error de mantener elevados los tipos de interés y la cotización de la peseta. Al mismo tiempo, reclama una clara política de apoyo a las empresas basada en un tratamiento fiscal favorable, en la rebaja de los costes de la energía, en la desgravación de los gastos de formación profesional y, fundamentalmente, en la flexibilización del mercado laboral.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo Cataluña en estos momentos?

—A mi entender, el ambiente económico es de incertidumbre y espera. La incertidumbre se deriva, entre otras causas, de la situación política en la Europa no comunitaria (Rusia, Los Balcanes, etc.), de la crisis en la construcción europea, ahora quizá paliada tras el referéndum danés sobre Maastricht, y también de los resultados de las elecciones legislativas en España. Por otro lado, se espera la reactivación económica general tantas veces pronosticada, pero que no acaba de hacerse realidad.

—¿Cuáles son los principales problemas de Cataluña, sobre todo los que tienen unos rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—El problema más importante, y también el más acuciante, es la falta de competitividad que se empezó a notar desde el primer momento de nuestra entrada en las Comunidades Europeas. Este problema se ha intensificado por el fracaso de las políticas macroeconómicas y por la escasa atención recibida por las empresas. Las políticas macroeconómicas se han reducido a la casi exclusiva utilización de la política monetaria, cuyos principales objetivos han sido financieros y exteriores (mantenimiento de una paridad elevada de la peseta y atracción de capitales exteriores), pero que han dañado la economía productiva, y sólo la terca realidad ha logrado que nos diéramos cuenta del error.

Pero, aparte de estos aspectos, hoy existe el convencimiento de que debemos mejorar la dotación y calidad de factores competitivos más estructurales, como pueden ser las infraestructuras o la I + D. Creo que se debe reconocer el esfuerzo que han hecho las administraciones públicas al respecto, pero debemos hacer mucho más para reducir la ventaja que nos llevan los países centrales europeos.

—¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas con las que se encuentra, en el momento presente, Cataluña?

—Nuestra economía está, desde hace algunos años, diversificada, aunque la presencia de la industria, también diversificada, es decisiva. Por otro lado, desde fechas más recientes, nuestra economía es abierta, no protegida, y esto es más claro para los productos industriales, en cuyos mercados hay más competencia.

Era previsible, pues, que el sector industrial catalán, y por tanto nuestra economía, tuviera dificultades, más o menos transitorias, al hacerse realidad el mercado interior europeo. Pero ya no era tan previsible que la culminación del proceso del mercado interior se diese en plena crisis, como desgraciadamente ha ocurrido. No obstante, debemos tener presente que el mercado interior es, a la vez, la gran amenaza y nuestra gran oportunidad.

En este gran mercado, la competencia es básicamente cosa de las empresas, y en Cataluña tenemos un tejido empresarial consolidado y dinámico que es uno de nuestros puntos fuertes, cuya referencia debemos tener constantemente en consideración los gobiernos para proveer el marco adecuado para su desarrollo y para apoyarlo cuando las circunstancias lo requieran.

—¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía catalana en esta nueva fase de ajuste?

—Mi impresión es que, pese a todo, en conjunto, y de momento, nuestras empresas resisten relativamente bien. Se está poniendo de manifiesto que durante los últimos años han hecho un esfuerzo importante de competitividad que si no ha dado mejor resultado es por la inexistencia de política industrial por parte del gobierno central. Una prueba de su mayor competitividad es que nuestras empresas están incrementando sus exportaciones.

Esto es la cara. La cruz de la moneda es que, en parte, esta resistencia relativamente buena pasa por reducción de plantillas y por regulaciones de empleo. Ahora ya casi todo el mundo acepta que es mejor esto que el cierre de las empresas, pero no deja de ser preocupante. Y lo es más todavía porque forma parte de un fenómeno muy general en las sociedades industriales. Cada vez se puede producir más con menos gente. Crear nuevos puestos de trabajo, que serán distintos de los que se han destruido, es ahora un objetivo muy principal que, entre otras cosas, requiere un esfuerzo grande de formación y de reciclaje.

Necesitamos que el entorno político-económico en que se mueve nuestra economía, y especialmente nuestra industria, le sea favorable. Por consiguiente, se requiere que no vuelva a repetirse la política de mantener muy alta

la peseta y muy altos los tipos de interés. Por otra parte, se debe practicar una política de apoyo a las empresas que vaya desde un tratamiento fiscal favorable a las inversiones hasta facilitar la proyección exterior de nuestras compañías, desde rebajar el coste de la energía hasta desgravar los gastos dedicados a formación profesional, etcétera. Y, por supuesto, hay que modificar, en el sentido de mayor flexibilidad, la legislación laboral.

« LOS FONDOS DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA APERTURA DE LA FRONTERA CON PORTUGAL ABREN NUEVAS EXPECTATIVAS »

Juan Carlos Rodríguez Ibarra
Presidente de la Junta de Extremadura

El Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, reconoce que el hecho de ser una región periférica dentro de un Estado periférico de la Comunidad Europea supone una clara restricción geográfico-económica. De ahí que considere muy importantes las ayudas de los fondos estructurales y del fondo de cohesión comunitarios para acabar con las deficiencias estructurales de Extremadura. La apertura de la frontera con Portugal también puede ser otro factor clave, en la medida en que Extremadura se integra en el triángulo económico Madrid-Sevilla-Lisboa y dejará de ser el extremo último de España.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo Extremadura en estos momentos?

—Podemos calificar el ambiente como de *preocupación esperanzada* ante la situación que atraviesa la economía nacional e internacional; de *esperanza* por las consecuencias positivas que puedan derivarse del funcionamiento del mercado único y el buen comportamiento de la economía regional los últimos años; pero también de *cautela*, porque los beneficios de la unión económica puedan ir a parar a las zonas más prósperas de la Comunidad Europea, en detrimento de las regiones menos desarrolladas.

—¿Cuáles son los principales problemas de Extremadura, sobre todo los que tienen unos rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—Los principales problemas de la economía extremeña de carácter permanente han sido:

- La *composición de la estructura productiva regional*, excesivamente dependiente del sector agrario y, por consiguiente, muy influida por la evolución de este sector.
- El *carácter periférico de la Región*, alejada geográficamente y con mala conexión viaria con los grandes centros de producción y consumo nacionales.
- La *insuficiente dotación de infraestructura económica* y de transportes, que ha actuado como cuello de botella para el desarrollo económico de la Región.

- La *escasa formación del capital humano*, y la ausencia de una clase empresarial emprendedora que dinamizara la economía extremeña.

Sin lanzar las campanas al vuelo, podemos afirmar que se han producido importantes avances en la última década:

- Hoy tenemos una *estructura productiva mucho más próxima a la media nacional* que hace unos años.

- La *red de infraestructura de carreteras regional ha mejorado* considerablemente con la ejecución del Plan Regional de Carreteras. La conversión en autovía de la N-V nos ha acercado al centro del país, facilitando el intercambio económico.

- La *creación de suelo industrial*, la construcción del *gasoducto, oleoducto, etc.*, dota a nuestra región, por primera vez en su historia, de la infraestructura económica necesaria para facilitar el despegue industrial.

- Las *fuertes dotaciones para formación* empleadas estos años, y los *incentivos económicos a la inversión* han mejorado la capacitación de los trabajadores extremeños y favorecido la aparición de una clase empresarial, joven y emprendedora.

—¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas con las que se encuentra, en el momento presente, Extremadura?

—Los puntos débiles de la economía extremeña siguen siendo los considerados como *problemas permanentes* en la contestación al punto anterior, y sobre los que hay que seguir profundizando y actuando para su corrección.

El hecho de ser una *región periférica*, dentro de un Estado periférico de la CE, constituye una restricción geográfico-económica muy importante de cara a las consecuencias del libre juego económico que impone el mercado único.

De la misma forma, esta característica periférica y el bajo nivel de desarrollo de Extremadura, dentro del conjunto de regiones de la CE, suponen una *oportunidad*, para beneficiarnos especialmente de la acción de los fondos estructurales comunitarios y del Fondo de Cohesión, que pueden ayudarnos a acabar con las deficiencias estructurales de la economía extremeña (baja dotación de stock de capital público y de formación humana y empresarial).

Una *oportunidad añadida* la constituye nuestra *vecindad con Portugal*, al desaparecer las fronteras económicas que han actuado siempre como un factor retardatario, lo que ahora nos acerca a un mercado importante y será positivo para Extremadura si sabemos beneficiarnos del intercambio económico que ello comporta.

—¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía extremeña en esta nueva fase de ajuste?

—El gran reto que tiene planteado la economía extremeña es que sea capaz de *crecer, a un ritmo superior al nacional y europeo*, y de crear empleo para aproximarnos a los niveles de desarrollo comunitario.

Todo ello sin deteriorar nuestro medio físico, y garanti-

zando un nivel de calidad de vida que suponga un diferencial positivo frente a otras zonas del país.

Como ya queda dicho anteriormente, la entrada en vigor del mercado único supondrá un *efecto positivo sobre el crecimiento de la economía en general*, pero también comporta *riesgos de aumento en los desequilibrios territoriales*, como consecuencia de las dificultades de las economías más débiles para adaptarse a la dinámica del libre mercado. Ante ello, las instituciones europeas deberán reforzar sus políticas de cohesión.

Las acciones de los fondos estructurales y fondos de cohesión, deberán traducirse en:

- *Dotación de infraestructuras económicas y de comunicación* a las regiones con más carencia, lo que aumentará la productividad de las empresas aquí instaladas.

- Mayor discriminación económica para *incentivar la localización industrial*.

- Acciones en materia de *formación*.

- Arbitrar las medidas necesarias para que la *reforma de la PAC* no tenga unas consecuencias graves en regiones con peso importante del sector agrario en el conjunto de su producción total.

El gobierno regional apuesta por la *modernización de nuestros sectores productivos*, mejorando la competitividad y buscando las ventajas relativas.

Hay que potenciar el *aprovechamiento del potencial endógeno* y dinamizar a la sociedad extremeña para especializar nuestra producción en aquellos sectores o actividades de mayor importancia comparativa.

Qué duda cabe de que la principal alternativa de desarrollo para Extremadura proviene de la transformación de nuestra producción primaria que sea capaz de situar en el mercado europeo productos realmente competitivos. Para ello, necesitamos el apoyo exterior para la *dotación de infraestructuras de transportes y energética* que puedan hacer competitivos en cuanto a costes, y por consiguiente en cuanto a precios, nuestros productos.

Tenemos muy claro que no vamos a realizar este desarrollo deteriorando nuestro medio físico. La conservación de éste va a ser el gran distintivo de *calidad de vida* en Extremadura frente a otras regiones.

Las riquezas naturales y nuestro patrimonio histórico-artístico constituyen, sin duda, un gran potencial de desarrollo para el sector turístico regional.

Las acciones de formación constituirán atención preeminente del gobierno regional para adecuar la formación de la población activa extremeña a las exigencias productivas del mercado único.

Se abren *nuevas expectativas*: la apertura de la frontera con Portugal induce a la cooperación con las autoridades portuguesas para incrementar las acciones de intercambio económico. Extremadura ya no va a ser el extremo último de España, sino que se integra en el importante triángulo económico Madrid-Sevilla-Lisboa.

« GALICIA SE MODERNIZA Y PREPARA EL TERRITORIO PARA MEJORAR SUS NIVELES DE COMPETITIVIDAD »



Manuel Fraga Iribarne
Presidente de la Junta de Galicia

Manuel Fraga afirma que Galicia se moderniza, y como ejemplo pone el fuerte aumento de la población ocupada en el sector servicios, con una tasa que llega ya al 45 por 100. El objetivo del Presidente de la Junta de Galicia es preparar el territorio para mejorar los niveles de competitividad, tanto a través del esfuerzo inversor en infraestructuras como por la vía de los incentivos a la inversión productiva.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo Galicia en estos momentos?

—El Informe «El empleo en Europa», elaborado por la Comisión de la CE el pasado año afirmaba que la amenaza del paro es el gran problema de la década de los noventa. En efecto, existen hoy en la Comunidad Europea 16 millones de parados (10 por 100 de la población activa), de los que 3 millones están en España. Galicia no es ajena a esta grave situación, de modo que nuestro ambiente económico se halla, sin duda, influido por esa preocupación social tan generalizada.

De otra parte, las posibilidades de favorecer el crecimiento a corto plazo son limitadas, ya que la eficacia de las medidas económicas depende en buena parte de su credibilidad y, en el caso de España, hay muy pocas opciones a consolidar en el *impasse* que se abre tras las elecciones generales. A partir de aquí, está claro que debería producirse un cambio en la política económica que mire más al grave problema del paro, sin olvidar, a medio plazo, una política encaminada a la competitividad y al crecimiento sostenible desde el punto de vista medioambiental.

Galicia está cada vez más integrada en los circuitos europeos de la economía, y se ve por ello influenciada por la situación de crisis general y por las llamadas «políticas regionales implícitas», de las que son buenos ejemplos la PAC y las políticas fiscales, monetarias, etcétera. Ante esta situación, nuestros planes de política económica miran más bien al medio plazo. O, lo que es lo mismo, a preparar el territorio para la competitividad. Es ahí donde cobra su sentido más cabal nuestro esfuerzo inversor en infraestructuras de todo tipo y el haber puesto

en marcha en estos años un moderno sistema de incentivos a la inversión productiva.

—¿Cuáles son los principales problemas de Galicia, sobre todo los que tienen rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—Bien, son más que conocidos los desajustes de nuestro sistema productivo. De una parte, un sector primario (agricultura, silvicultura, pesca) sobredimensionado en cuanto a empleo; un sector secundario con industrias en declive —sin culminar su proceso de reconversión— y un tejido industrial poco articulado... y, de otra parte, un sector terciario de apreciable peso relativo en el conjunto... Eso es así, aunque en los últimos diez años esa estructura ha entrado en fase de mutación. Así, a la altura de 1980, la distribución sectorial del producto daba al sector primario casi un 13 por 100 (España, 7 por 100) y en 1991 las cifras correspondientes pasarían a un 7,6 por 100 (España, 7 por 100). En el mismo sentido, baste recordar, con datos censales, que en 1981 las proporciones de población ocupada por sectores eran del 35 por 100 en la agricultura (en 1991, el 24 por 100); el 17,5 por 100 en la industria (18,3 por 100 en 1991); 10,0 por 100 en la construcción (13 por 100 en 1991) y 34 por 100 en los servicios (45 por 100 en 1991). En este sentido, Galicia se moderniza, al margen de los costes sociales que un proceso de esta naturaleza suele implicar. Contamos hoy con una agricultura más eficiente y unos subsectores pesquero, marisquero y de acuicultura punteros en muchas vertientes. También la industria avanza en igual dirección, existiendo empresas y grupos de reconocido prestigio en áreas diversas, desde las rocas ornamentales hasta la joyería, la moda, las telecomunicaciones, etc., y por supuesto los servicios, entre los que cabe destacar el importante subsector financiero gallego, el turismo, etcétera.

Conviene destacar que la «imagen de Galicia» es, desde hace pocos años, otra muy distinta. Nuestra región es hoy conocida dentro y fuera de España, y esto es un requisito indispensable para nosotros. Mucho más cuando todas las regiones —de aquí y de allá— compiten por la atracción de inversiones y la colocación de sus productos en mercados cada vez más amplios, diversos y exigentes en calidad más que en precios.

—¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y amenazas, con las que se encuentra Galicia en el momento presente?

—En cuanto a los puntos débiles, algo dije en la anterior pregunta. En general, Galicia tiene clara vocación agraria, con potencialidades en el subsector forestal tanto desde la perspectiva económica como desde la del aprovechamiento social y ecológico de los espacios naturales. De ahí que nos planteásemos con rigor la lucha contra los incendios forestales, objetivo culminado con todo éxito. La principal amenaza en el sector primario está en el declive de las producciones continentales (leche y carne, en particular) y en el propio futuro de la PAC ante los resultados de la Ronda Uruguay. La respuesta es nuestro compromiso para la racionalización de las explotaciones agrarias a través de la concentración parcelaria —entre

otras medidas—, el plan forestal, la implicación de la agroindustria en el desarrollo rural, el fomento del cooperativismo, el turismo rural, la artesanía y, en general, los estímulos al desarrollo local, aprovechando la variedad y calidad de nuestras materias primas, y la riqueza y diversidad de nuestro patrimonio.

En cuanto a la industria, nuestro planteamiento es claro. El desarrollo de este sector, junto al de la construcción, es clave en la estrategia de desarrollo de nuestro Plan Económico y Social 1993-1996. Las debilidades aquí están en una insuficiente base tecnológica, una estructura empresarial un tanto minifundista, con limitada capacidad de absorción de activos agrarios, sin perjuicio de la existencia de industrias pioneras, exponente de la creatividad de nuestros hombres de empresa. Nuestra apuesta aquí —y así lo venimos practicando desde 1990— es la mejora de las infraestructuras para, junto con la promoción, incentivar la inversión productiva. Disponemos de un abanico de planes en ejecución (telefonía, telecomunicaciones, polígonos industriales, parque tecnológico, red de gas, etc.) y de un Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE) que darán resultados muy positivos promoviendo una cultura de la calidad, base para la captación de nuevos mercados.

Sobre esas ideas, cabría decir que estos cuatro años de legislatura abordaron a fondo el problema de las deficientes infraestructuras, sin prescindir, por supuesto, de la incentivación de la actividad productiva. Espero que la próxima legislatura —si Galicia vuelve a depositar su confianza en nosotros— sea la del definitivo lanzamiento de una Comunidad que, desde el amor a la tierra y a sus tradiciones, queme nuevas etapas hacia su modernización.

—¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía gallega en esta nueva fase de ajuste?

—Como suele ocurrir, la marcha hacia la unión económica y monetaria está llena de luces y sombras. El viejo dilema entre equidad y eficiencia que da juego a las políticas de «ajuste territorial», tanto de la Comunidad Europea —a través de la nueva política regional— como de los estados miembros —por medio de la solidaridad interterritorial— corren el riesgo, ahora desde una perspectiva más política, de revisarse en atención a nominales programas de convergencia. Por su parte, en Europa se vuelve a hablar de eficiencia y democracia como fundamentos del «poder europeo». Pero lo que está muy claro es que sin una atención efectiva a la desigualdad interregional —inicial o sobrevinida— la unión europea será mera retórica.

Parto, en consecuencia, de que el «mercado puro y duro» no puede ser la solución para una convivencia social de futuro en esa titubeante Europa. Tampoco, desde luego, el intervencionismo esterilizador. La solución, sin incurrir en arbitrarismo, está en volcarse hacia la formación humana. Es en esta área donde la CE, sus estados miembros y sus regiones pueden hacer una apuesta profunda y coordinada que permita avances serios en la creatividad humana, que es, al fin y a la postre, la «riqueza de las naciones».

Pero lo que sí está claro es que, a pesar de la interrelación y mundialización de la economía, las diversas regiones

de Europa, no obstante la diversidad de sus estatutos jurídico-políticos, están afrontando con gallardía su responsabilidad en el propio desarrollo y su presencia decisoria en las grandes políticas de los estados y de la CE, puesto que, al fin y al cabo, es en esos espacios donde se sufren, con la proximidad de los hechos, los impactos de aquellas decisiones exógenas.

Por tanto, nuestra comunidad autónoma estará en los próximos años atenta a validar su presencia fuera y dentro de España, a la que, por cierto, se siente íntimamente unida, lo que no obsta para reivindicar, desde todos los planos posibles, el derecho a su desarrollo sostenido.

Desde el vigor de esa presencia, y desde nuestra cercanía vivencial con Portugal, aspiramos a la cooperación interregional para el desarrollo empresarial y cultural y, desde nuestras raíces en América, aspiramos a una Galicia amplia, diversa y moderna.

En consecuencia, vemos los próximos años llenos de riesgos, pero también plenos de esperanzas, desde nuestra justificada creencia en la capacidad de los gallegos —de dentro y fuera— para labrarse un futuro mejor en España y en Europa. Desde la Xunta, profundizaremos en lo ya iniciado para impulsar y coordinar ese proceso de modernización de nuestra sociedad. Acerca de esto no deben caber dudas.

« LA LUCHA POR LA COMPETITIVIDAD PARA AFRONTAR EL RETO EUROPEO REQUIERE ESFUERZOS PERMANENTES »

Joaquín Leguina Herrán
Presidente de la Comunidad de Madrid



La competitividad de la industria que requiere el nuevo contexto económico, derivado de la integración en el mercado único europeo, exige esfuerzos permanentes, según explica el Presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, en su extensa respuesta al cuestionario. Asimismo, las rigideces del mercado del trabajo entre la oferta y la demanda constituyen otra de sus principales preocupaciones, a las que intenta dar respuesta desde su gobierno regional.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo Madrid en estos momentos?

—La caída de los regímenes de los países del Este de Europa —que permitía la liberación de recursos dedicados a la industria bélica, y la apertura de grandes y nuevos mercados— y la finalización de la guerra del Golfo —que aseguraba el suministro de petróleo a precios estables o a la baja— incitaron a la previsión de una nueva etapa de desarrollo general y sostenido. No ha sido así.

Las dificultades de reorganización de la nueva realidad han ido ensombreciendo las perspectivas. El notable descenso de la actividad económica, que afectaba especialmente a EE.UU., Canadá y Reino Unido, ha acabado extendiéndose a todos los países europeos, que durante 1990 estaban en la fase descendente del ciclo económico, pero con un ritmo de actividad más sostenido; al tiempo, se reducían notablemente los ritmos de crecimiento de la economía japonesa. Por su parte, la falta de acuerdo en el marco del GATT empeoró las expectativas del comercio mundial.

La decisión de Alemania de financiar los costes de la reunificación recurriendo a la captación de ahorro externo, mediante la subida de los tipos de interés, mientras los EE.UU. incentivaban la actividad económica reduciéndolos, ha servido, entre otras cosas, de cebo para desencadenar la intensa crisis monetaria que, después de varios meses, todavía no se ha cerrado. Se ha puesto en cuestión el Sistema Monetario Europeo. La reactivación de la economía mundial, varias veces esperada, se ha ido retrasando en cada una de las nuevas previsiones. La conciencia de crisis se ha intensificado; las previsiones para 1992 y 1993 de las diversas economías se vienen revisando permanentemente a la baja. La intensidad y la naturaleza de la

crisis todavía no se han determinado y no hay ninguna explicación que suscite un acuerdo generalizado. Las tensiones actuales están reflatando los problemas estructurales no resueltos y los desequilibrios de las distintas áreas económicas mundiales.

La información más reciente confirma que la reactivación se aleja en el tiempo, y se intuyen unos ritmos menos alegres. Parecería que se está ante un proceso de reorganización de equilibrios entre los principales centros de la economía mundial, que se mezcla con la imprescindible reestructuración de las economías, especialmente de los países industriales, y el replanteamiento de sus desequilibrios esenciales. Si el diagnóstico es válido, la experiencia enseña que estos procesos pueden ser lentos y dolorosos.

Todo lo anterior implica que 1993 será en España un año difícil, de reajustes, y que la salida de la crisis no se prevé antes de 1994. Los indicadores del cuarto trimestre de 1992, sobre todo los resultados de la *Encuesta de Población Activa* (EPA), manifiestan un agravamiento de la situación laboral.

La economía madrileña continuó, en 1992, discurrendo por la senda de crecimiento desacelerado que venía manteniendo anteriormente, dentro de la actual fase descendente del ciclo que marca la evolución de las economías nacional e internacional.

Los efectos sobre la economía regional siguen resultando, por el momento, menos negativos en términos globales que sobre el conjunto del país, aunque la prolongación de esta etapa, claramente más larga de lo esperado y deseado, produce ya dificultades acusadas a las empresas. Los distintos indicadores ponen de manifiesto la reducción o el estancamiento cada vez más intenso de la actividad, y particularmente el continuo ensombrecimiento de las perspectivas empresariales, de modo especial a partir del segundo semestre de 1992.

La economía madrileña aportó en 1990 casi el 16 por 100 del PIB español, y presenta en su estructura productiva rasgos que la diferencian del conjunto de la economía española. Al igual que ocurre ya en el conjunto del país, la mayor parte de la producción regional se origina en el terciario, pero en Madrid el peso del sector es del 71,8 por 100, frente al 58,0 por 100 en España.

La Comunidad de Madrid es el segundo conjunto industrial de España, por detrás de Cataluña, y aportó en 1989 al 12,2 por 100 al PIB industrial nacional, manteniendo una trayectoria de aumentos crecientes de su participación en la producción industrial española desde 1985.

El sector agrario español aporta el 5,6 por 100 al PIB y mantiene el 10,1 por 100 de la ocupación nacional; en Madrid, supone sólo el 0,3 por 100 de la producción y el 0,6 por 100 del empleo regional, y mantiene una tendencia descendente en su aportación a la economía madrileña.

La importante destrucción de empleo no ha llegado a reflejarse, en 1992, en la Comunidad de Madrid, que registró un crecimiento de 22.330 puestos de trabajo. Sin embargo, el fuerte aumento de población activa registrado (4,4 por 100 de incremento frente al 0,4 por 100 en España) originó un considerable aumento del paro, que afectaba, a finales de 1992, a 300.000 madrileños.

Los distintos componentes de la demanda regional evolucionaron de distinta forma a lo largo del último período: la inversión presentó una tendencia decreciente ininterrumpida, en tanto que el consumo privado continuó creciendo, aunque lo hizo a tasas paulatinamente menores hasta llegar, a finales de 1992, al agotamiento de su fase expansiva, con crecimientos reales negativos.

El comercio exterior, sin embargo, mostró una evolución positiva en 1992, al producirse un aumento de las exportaciones del 27,9 por 100 sobre las del año anterior, acompañado por una fuerte moderación del ritmo de crecimiento de las importaciones, que superaron a las de 1991 tan sólo en un 2 por 100.

La producción regional siguió una evolución semejante a la de la demanda interna en 1992. Al iniciarse el año, mantenía tasas de crecimiento interanuales moderadas en la industria y los servicios, que fueron haciéndose paulatinamente menores con el transcurso de los meses hasta terminar el año, en el caso de la industria, con niveles de actividad inferiores a los del año anterior, mientras los servicios conservaron un moderado aumento de la actividad. En ambos casos, se aceleró el ritmo descendente en el tramo final del año.

La economía de la Comunidad de Madrid sigue el ciclo descendente iniciado en 1990. Los datos de 1992 no son alentadores. El mejor comportamiento relativo que la economía nacional no es sino un pobre consuelo, a no ser que se perciba como indicio de una capacidad de respuesta real y motivo de autoconfianza ante la crisis. Con los datos disponibles, no es razonable esperar un rápido cambio de la situación durante 1993. La actividad económica global se estancará o disminuirá, seguirá la crisis en las empresas, disminuirá la ocupación y crecerá el paro; la mejoría, de producirse en 1993, empezaría a notarse a final de año. Las inercias generadas son fuertes y se requerirá potenciar los estímulos para vencerlas. La crisis existente quizá sea más de confianza que de recursos económicos; es una crisis económica, pero fundamentalmente una crisis social, del sistema de valores económicos y sociales.

En este contexto, cobran especial valor las iniciativas que contribuyan a la cooperación de los distintos agentes socioeconómicos, iniciativas cuyo objetivo último radica en la movilización de la sociedad en torno a propuestas capaces de propiciar la recuperación de la confianza, elemento esencial de la reactivación de la economía. En la Comunidad de Madrid, sindicatos, empresarios y gobierno regional han alcanzado un acuerdo para la recuperación económica y del empleo, concertando el denominado *Pacto por la Industria y el Empleo*.

—¿Cuáles son los principales problemas de Madrid, sobre todo los que tienen unos rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—El principal problema que afecta en estos momentos a la Comunidad de Madrid lo constituye, cómo no, el entorno de crisis económica internacional, agravado, si cabe, por su coincidencia temporal con el proceso de ajuste macroeconómico que exige el Programa de Convergencia con la CE. Es decir, el paro.

Al margen de estos problemas macroeconómicos, fundamentalmente de carácter coyuntural, la industria española arrastra importantes problemas estructurales. Así, se podría destacar la «brecha» en la competitividad de la industria en el nuevo contexto económico que supone la integración en el mercado único europeo. Esta «brecha», persistente a pesar de los esfuerzos realizados, pone de manifiesto el carácter permanente que la lucha por la competitividad necesariamente tiene. En este sentido, se puede afirmar que la industria madrileña ha conseguido, en los últimos años, una mayor y mejor adecuación frente a la industria nacional, globalmente considerada, debido a la existencia de una base industrial diversificada y especializada en sectores de demanda media y fuerte, y a la apuesta por la búsqueda de ventajas competitivas en la incorporación de tecnologías e intangibles relacionados con la organización empresarial y la cualificación del factor trabajo.

El segundo problema, aunque no menos importante, se aprecia en el mercado de trabajo, que origina rigideces en la confluencia entre la oferta y la demanda. La Comunidad de Madrid cuenta con un gran número de universidades, escuelas de postgrado, centros de formación y empresas muy avanzadas tecnológica y organizativamente; factores que, sin duda, dotan a la mano de obra de un alto grado de cualificación, muy superior a los niveles nacionales. Sin embargo, esta mejor cualificación de la oferta de trabajo madrileña no impide la existencia de ciertas rigideces derivadas de las exigencias de cualificación y especialización que demanda la empresa madrileña.

Frente a estos dos problemas, el gobierno regional ha realizado un importante esfuerzo en dos grandes líneas: de una parte, ha impulsado una decidida política industrial encaminada al fomento de la modernización tecnológica y organizativa de la empresa madrileña, a la mejora de la calidad de los productos y su comercialización en los mercados internacionales; como ejemplo, se pueden destacar los programas regionales en materia de modernización industrial, I + D, calidad, cooperación y promoción exterior...; de otra parte, ha apostado por una política de empleo orientada a mejorar la cualificación tanto de la mano de obra como del empresariado, incentivando la contratación fija; en esta línea de acción, cabe destacar las actuaciones contenidas en el Programa de Empleo y en el Programa de Formación Técnico-Profesional.

A los problemas expuestos anteriormente, que la economía madrileña, aunque en menor medida, comparte con la nacional, hay que añadir peculiaridades o características de nuestra comunidad que presentan un marcado carácter permanente. Entre éstas, quizá la más relevante es el «diferencial» Norte-Sur existente en la Región. Diferencias en cuanto a nivel de renta, infraestructuras, dotaciones, vivienda, medio ambiente y, en definitiva, calidad de vida, entre dos zonas de nuestra comunidad claramente delimitadas: los distritos y municipios del centro y Norte de la capital frente a los menos favorecidos distritos y municipios del Sur.

La corrección de estos desequilibrios territoriales requiere una decidida y continuada acción de la Administración pública. En este sentido, el gobierno regional ha dirigido sus actuaciones en dos direcciones: en primer

lugar, se ha realizado un considerable esfuerzo inversor en las áreas Sur y Este de nuestra comunidad en materia de infraestructuras, sanidad, enseñanza, medioambiente...; de otro lado, se incentiva preferentemente el desarrollo de actividades económicas en las áreas menos favorecidas mediante diversos mecanismos, tales como el acceso a suelos baratos y a una financiación más blanda, programas de formación y recualificación de la mano de obra, y mejora de infraestructuras productivas (rehabilitación de polígonos industriales, centro de empresas, etc.). El resultado de estas acciones no se ha hecho esperar; se puede afirmar rotundamente que se han acertado notablemente, en los últimos años, los desequilibrios territoriales de nuestra comunidad.

Junto al desequilibrio socioeconómico que supone el diferencial Norte-Sur de nuestra comunidad persisten, a pesar del esfuerzo de los últimos años, algunas carencias en materia de transportes de pasajeros y mercancías, y de suelo urbanizado. En lo que se refiere a transportes, se ha realizado una notable mejora y ampliación de la red y conexiones del metro y autobuses urbanos e interurbanos, ferrocarriles de cercanías, intercambiadores, infraestructuras viarias, etc. En materia de suelo, se ha optado por el incremento de la oferta pública y por la adecuación de la ya existente a los nuevos requerimientos de la demanda.

—*¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas con las que se encuentra, en el momento presente, Madrid?*

—La Comunidad de Madrid es el principal centro de consumo nacional y un centro de producción fundamental en muchos sectores, especialmente en aquéllos más avanzados tecnológicamente. Madrid es el primer centro administrativo y financiero del Estado, lo que ha constituido un factor clave no sólo en términos de empleo, inversión y rentas, sino también en lo referente a la localización del sector terciario más moderno e innovador y a una mayor cualificación profesional del trabajo. Además, nuestra Región cuenta con un buen número de importantes universidades, escuelas de postgrado y centros de formación, una estructura productiva ampliamente dominada por las PYME especializadas en sectores de demanda media y fuerte, generalmente de propiedad familiar y origen autóctono, con mayor apego al territorio y mayor resistencia a la crisis que la gran empresa. En Madrid existe una alta concentración de activos científicos y tecnológicos, una base empresarial y un mercado dinámico, factores que están contribuyendo decisivamente a la innovación. La estructura de la población, con una amplia base de población joven, constituye una de las potencialidades más destacables de nuestra región, pero simultáneamente se concreta en una incorporación continuada e intensa de fuerza de trabajo al mercado laboral. Esta incorporación representa, sin duda, un factor de riesgo para la evolución futura de los niveles de desempleo, que desde el gobierno regional se pretende paliar movilizándolo todos los resortes a nuestro alcance para conseguir una rápida recuperación de las expectativas que permita a nuestra economía la vuelta a la senda expansiva.

La disposición de claras potencialidades de nuestra comunidad no puede, sin embargo, ocultar la existencia de

importantes desequilibrios y debilidades en nuestra estructura económico-social. Entre éstos, puede destacarse la precariedad del empleo, quizá derivada en gran parte de carencias en el sistema educativo, que actúa como freno de la cualificación profesional, además de generar inquietud y desánimo social. Otras debilidades importantes son los estrangulamientos derivados de la falta de equipamientos e infraestructuras, desequilibrios en el sistema científico-tecnológico y su escasa integración en las empresas, y otro factor muy importante es la excesiva dependencia de las PYME del mercado regional y, en consecuencia, su escasa o nula internacionalización.

Pero el principal riesgo que amenaza al sector productivo madrileño, especialmente a la industria, estriba en la posibilidad de sucumbir a las tentaciones inmovilistas. Por eso es necesario realizar un esfuerzo concertado capaz de movilizar todos los recursos innovadores disponibles hacia un único objetivo común: afrontar el nuevo marco de competitividad y división del trabajo.

En este sentido, el nuevo entorno internacional —caracterizado principalmente por la situación de crisis económica mundial, el proceso de unión económica europea, la inestabilidad en los países del Este y una progresiva internacionalización de la economía— representa la principal fuente de oportunidades y amenazas para la economía nacional, y para la madrileña en particular. De la corrección de las debilidades y del aprovechamiento de las potencialidades de la estructura económica madrileña, de la agresividad con que nos enfrentamos al reto que supone el mercado único europeo, depende el éxito o fracaso del proceso de liberalización económica y la inclusión de Madrid en el conjunto de las grandes áreas económicas europeas y mundiales.

—*¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía madrileña en esta nueva fase de ajuste?*

—Me parece interesante hacer una breve referencia previa al efecto que la adhesión a la Comunidad Europea ha tenido sobre la economía española.

Ya desde el período transitorio, la economía española tuvo que hacer importantes modificaciones, sobre todo para adaptarse a un mercado catorce veces mayor que el español y a una competencia mucho más intensa de otros países más desarrollados que el nuestro.

El comercio entre la Comunidad Económica y España no era, como se decía frecuentemente, un trueque de productos industriales por agrícolas. En realidad se importaban y exportaban productos industriales. En 1984, los productos químicos, los manufacturados y la maquinaria y material de transporte alcanzaban el 77,73 por 100 de las importaciones y el 73,84 por 100 de las exportaciones. Las posibilidades de comercio mutuo eran, pues, muy amplias.

Los efectos más importantes que se esperaban para España de la integración eran los que afectaban directamente a la estructura productiva. El aumento de la competencia obligaría a las empresas a vigilar sus costes de producción y promovería una «selección», por cuya causa se expandirían las más eficientes de aquéllas y desaparecerían las marginales; la ampliación del mercado estimu-

laría la innovación y el cambio tecnológico, y aumentaría la capacidad productiva y la producción total; espoleada por la dilatación de los horizontes empresariales y por el cambio de las condiciones productivas, la inversión, en fin, se incrementaría.

Hoy, una primera evaluación permite afirmar que la integración ha sido positiva. Ha provocado una evolución favorable de algunos de los principales indicadores macroeconómicos, tales como la renta per cápita, el empleo, la producción, los precios, etc., hasta la llegada de la actual fase recesiva del ciclo económico mundial.

La economía española, desde la incorporación a la Comunidad Europea, siguió un elevado ritmo de crecimiento, dentro del favorable pulso de la economía internacional. A lo largo del período de 1986 a 1991, el crecimiento económico alcanzó una tasa media anual del 4,2 por 100, claramente superior a la media comunitaria (2,8 por 100). En consecuencia, el nivel de la renta per cápita española respecto a la de la Comunidad Europea ha pasado del 72,8 por 100 en 1986 al 79,0 por 100 en 1991.

Hemos asistido, a lo largo de los años ochenta, a una fuerte capitalización de la empresa española y a un rediseño de sus estrategias, que ya no pueden estar centradas sólo en el mercado interior y que tienen que dar el más alto valor a la tecnología, los intangibles, la integración, la formación, etcétera.

En la Comunidad de Madrid, el efecto de la adhesión sobre la economía ha sido, sin duda, positivo. Desde 1986 hasta 1990 no ha dejado de crecer. El PIB creció en esos años a un ritmo anual del 5,93 por 100, pasando el PIB por habitante de 964.236 pesetas en 1986 a 1.181.172 pesetas en 1990. La tasa de desempleo, mientras tanto, en el período de 1985 a 1991, pasó del 22,0 al 12,9 por 100, hasta que, en el tercer trimestre de 1992, alcanza el 15,5 por 100. En el incremento del desempleo, como antes se ha señalado, tiene una incidencia muy importante el considerable incremento de la población activa.

Los desafíos de la economía regional se centran en la solución de sus problemas estructurales, la reducción del desempleo, la revitalización del tejido industrial, la internacionalización de la empresa madrileña, la mejora de las comunicaciones en el interior de la Región y con el exterior... En la solución de todos ellos tiene mucho que decir el sector público, especialmente en esta fase recesiva del ciclo económico. Así parecen haberlo entendido al otro lado del Atlántico. La nueva Administración, en EE.UU., propone un papel más relevante del sector público (en las infraestructuras, el medio ambiente, la energía, la investigación, el fomento del empleo...), dando por «gastadas» las propuestas de privatismo y liberalismo que desde diferentes tribunas y sitios se han ofrecido para remontar estos tiempos difíciles.

El gobierno de la Comunidad de Madrid está centrando sus esfuerzos en aquellos aspectos sobre los que tiene la mayor capacidad de actuación, sobre los que tiene competencias o puede llegar a tener influencia. Con la definición del modelo territorial —con el que se pretende distribuir las actividades en el espacio, además de incorporar una importante dosis de racionalidad a la organización de los usos del suelo— se hace posible un mayor rendimiento

de las infraestructuras del transporte. Una región metropolitana polinuclear que potencie los sistemas urbanos del Sur y del Este, que concentran gran cantidad de actividades empresariales, de producción y servicios en las que se dan también importantes concentraciones de población. Así, el desarrollo del «corredor del Henares» o el de la zona Sur metropolitana, centrado en el proyecto sobre el arroyo del Culebro. Algunos elementos importantes de esa estrategia territorial en los que está comprometida la Comunidad de Madrid, como la ciudad aeroportuaria en Barajas, las «áreas de oportunidad» Parque Oeste en Alcorcón, la Garena en Alcalá de Henares, los «parques tecnológicos» de Tres Cantos, Alcalá de Henares y Leganés, el «Parque Empresarial» de las Rozas, los «centros de transportes» de Coslada y Getafe, los «parques industriales» genéricos, como el de las Monjas en Torrejón de Ardoz, o para actividades concretas, como La Ciudad de la Imagen en Pozuelo de Alarcón.

El desarrollo de estas iniciativas se produce sobre las nuevas infraestructuras del transporte M-40 y M-50, coordinando así el incremento de accesibilidad con la localización de las actividades que más la demandan. A su vez, se trabaja en la integración del sistema de transporte, en el que las mejoras del metro y la red ferroviaria de cercanías se completan con una malla suplementaria de la red viaria que permita un desarrollo territorial fácil, integrado e integral.

La formación, es bien sabido, es elemento clave para el desarrollo. En la Comunidad de Madrid, su gobierno siempre ha sido consciente de ello, y ha ido poniendo las bases para que los ciudadanos, todos, pero especialmente los jóvenes, puedan alcanzar los niveles de conocimiento que requieran para su mejor participación en el hoy reducido mercado laboral. Mencionaré la puesta en marcha y el desarrollo constante de la Universidad Carlos III —la Universidad del Sur—, con sus instalaciones en Getafe y Leganés, y la creación del Instituto Madrileño de Formación, que integra la enseñanza profesional no reglada, y que representa la continuación de modo integrado de la presencia de la Comunidad de Madrid en ese tramo de la formación.

Merece la pena señalar un modo de actuar en la Comunidad de Madrid, un modo de gobernar basado en el diálogo y la concertación. En la esfera de la concertación con las otras administraciones, es de destacar la formación de consorcios como el Regional de Transportes y el que desarrollará la ciudad aeroportuaria, o los convenios específicos como el suscrito para incrementar las infraestructuras del metro o la ejecución del plan para el transporte en las grandes ciudades desarrolladas para Madrid, en el que la Comunidad ha tenido una notable participación.

En otra perspectiva, en la que se abre a la sociedad civil, hay que hablar de una importante pieza para el futuro de la Comunidad de Madrid: el *Pacto por la Industria y el Empleo*. Alcanzar un crecimiento estable y equilibrado de nuestra economía, conseguir un mayor nivel de actualidad, una mejora de las actividades productivas y de las condiciones de trabajo, un incremento de la inversión y, por ende, creación de empleo, son los objetivos del pacto que se ha firmado entre los sindicatos mayoritarios madrileños

—Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT)—, la principal organización patronal —la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM-CEOE)— y el gobierno de la Comunidad de Madrid.

El *Pacto* contempla la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones que obedecen a estrategias, programas y planes que pueden estructurarse en tres grandes grupos: acuerdos en materia de formación, empleo y relaciones laborales; acuerdos en materia de política industrial, y acuerdos en materia de suelo e infraestructuras.

Este *Pacto* constituye una de las fuentes de inspiración de la política industrial de la Comunidad de Madrid en los próximos años. En él se encuentran no sólo una serie de líneas y medidas para la actuación, sino, lo que es más importante, una concertación social, una confluencia de preocupaciones, intereses y propuestas de solución de los distintos agentes sociales. Al pacto propiamente dicho acompaña un manifiesto por la industria en cuya elaboración han participado las principales universidades e instituciones madrileñas y muy prestigiosos especialistas en la materia.

« LOS GRANDES PROBLEMAS DE LA REGION DE MURCIA SON LA ESCASEZ DE AGUA Y LOS DEFICIT EN INFRAESTRUCTURAS »



María Antonia Martínez García
Presidenta de la Región de Murcia

La escasez de agua es un problema tradicional de Murcia que nuevamente señala como crucial en esta entrevista la Presidenta de la Comunidad Autónoma de la Región, María Antonia Martínez García, que llama también la atención sobre las décadas de marginación en que ha permanecido Murcia respecto a los grandes proyectos de infraestructuras estatales, haciendo hincapié en la situación especial del aeropuerto de uso militar y civil compartido. Alerta también sobre el clima de pesimismo generalizado que ha provocado la crisis actual y que, a su juicio, induce a una percepción de la situación económica peor que la que realmente existe.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo la Región de Murcia en estos momentos?

—La Región de Murcia está atravesando una etapa de desaceleración económica similar a la que afecta a toda la economía española, que está repercutiendo con intensidad en el aumento del número de desempleados.

Sin embargo, es muy probable que la especial gravedad de los problemas que afectan a un determinado tipo de industria —fundamentalmente defensa, energética, petroquímica o minerales— y a la industria conservera, más por problemas financieros que de mercado en este caso, esté creando un clima de pesimismo generalizado que provoca una percepción de nuestra situación económica peor a la que realmente existe. De hecho, Murcia, que durante la etapa de expansión económica tuvo un crecimiento superior al de la media española y uno de los más elevados entre las comunidades autónomas, está sopor-tando mejor que otras esta etapa de desaceleración, también con crecimientos del PIB superiores a la media nacional durante los años 1990 y 1991 que, igualmente, ha mantenido durante 1992, según las estimaciones de la Fundación FIES.

No obstante, considero que ésta será una sensación pasajera, porque tenemos la convicción, contrastada por diferentes expertos y estudios económicos, de que Murcia es una de las regiones de mayor potencialidad económica, situada en un área geográfica en expansión, y que cuando

se inicie la recuperación demostrará su capacidad para el desarrollo, como lo ha hecho durante la segunda mitad de la década de los ochenta.

—*¿Cuáles son los principales problemas de Murcia, sobre todo los que tienen unos rasgos más permanentes? ¿Cuáles son los puntos débiles en la actualidad?*

—Desde un punto de vista económico, los grandes problemas de la Región son, y en eso creo que existe un cierto consenso entre todos los agentes socioeconómicos, la escasez de agua y los déficit en infraestructuras.

El agua ha sido un elemento vital en nuestro desarrollo, pues ha propiciado una potente agricultura y una fuerte industria agroalimentaria. Sin embargo, las previsiones del trasvase Tajo-Segura —llegar a disponer de 1.000 Hm³— están muy alejadas de la realidad, pues el promedio recibido durante los últimos años no ha llegado ni a la tercera parte, y en épocas de sequía como la actual la situación es angustiosa. Por eso apoyamos decididamente el Plan Hidrológico Nacional, pues confiamos en que sea el medio que permita en unos años superar definitivamente esta carencia.

El otro problema, como decía, es el déficit en infraestructuras. Han sido varias décadas las que esta Región ha estado al margen de los grandes proyectos estatales acometidos en esta área. Han sido muchos años sin inversiones de relevancia en nuestra red viaria, con unas infraestructuras ferroviarias sin mejorar, con un aeropuerto militar que se compatibiliza en determinada franja horaria con el uso civil.

Esta situación empezó a cambiar radicalmente con la llegada de los socialistas a los gobiernos de la Nación y de la Región —a título de ejemplo, diré que la primera autovía de la que hemos dispuesto se ha construido en los últimos años ochenta—; pero aunque la situación ahora es distinta, todavía estamos lejos de haber alcanzado nuestros objetivos.

Yo creo que éstos son nuestros principales puntos débiles en la actualidad, aunque probablemente todavía tenemos que hacer esfuerzos para diversificar nuestra estructura productiva y mejorar la formación de los recursos humanos. Y sobre todo, y a corto plazo, desechar ese clima de pesimismo que percibo, y al que me refería anteriormente, que creo está basado más en el efecto inducido por problemas puntuales y localizados que en la situación real de nuestra economía.

—*¿Qué avances se han registrado, en los últimos años, para su solución?*

—Como anticipaba anteriormente, los avances han sido muy importantes, sobre todo en materia de infraestructura viaria. La conexión con el Mediterráneo se ha asegurado con las autovías Alicante-Murcia y Murcia-Cartagena; las comunicaciones con Andalucía también se solucionan con las autovías en construcción; y las obras pendientes —la autovía Murcia-Albacete, que facilitará la conexión con Madrid, y la autovía Alicante-Cartagena— son proyectos decididos que se iniciarán, en algún caso, este mismo año. En nuestra red regional, las mejoras también han sido notables, ya que, a través de los planes regionales

de carreteras, se ha evitado el aislamiento secular de algunas comarcas.

Respecto al agua, las gestiones para asegurar el abastecimiento son continuas, pero nuestro problema no es tan sólo la escasez, sino, a veces, el exceso que provoca inundaciones; y a este respecto el Plan de Defensa contra las Avenidas, de coste superior a los 50.000 millones de pesetas, estará terminado al próximo año. Además, están en marcha los planes de saneamiento del Mar Menor y del río Segura.

La estructura productiva se ha potenciado notablemente en estos años, sobre todo a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Incentivos Regionales, que ha permitido una expansión y modernización relevante en sectores estratégicos como los de la industria agroalimentaria, la comercialización hortofrutícola y el turismo.

En cuanto a la gran industria cartagenera, estamos convencidos de que, tras esta fase de ajuste, los efectos inducidos por la inversión de General Electric, el reciente acuerdo del Consejo de Ministros de declarar este municipio zona de promoción especial y el plan especial aprobado recientemente para la zona de Cartagena, también por el Consejo de Ministros, que implica inversiones valoradas en más de 130.000 millones de pesetas, serán elementos decisivos para superar la crisis.

—*¿Cuáles son los puntos fuertes, las oportunidades actuales, de la Región de Murcia?*

—Son varios e importantes, y en ellos basamos nuestra confianza en el futuro de esta Región. Murcia dispone de una situación geográfica excepcional y va a disfrutar de una accesibilidad inmejorable a los mercados europeos tras la mejora en nuestras comunicaciones, a la que me he referido anteriormente.

Además, está localizada en un área económica en expansión, el Arco Mediterráneo, y con un entorno metropolitano, Murcia-Cartagena, con importantes recursos humanos, tecnológicos y de suelo industrial, que ha de ser un importante foco de atracción de inversiones. Por otra parte, la agricultura, la industria agroalimentaria y el turismo cuentan con grandes posibilidades de desarrollo.

A su vez, tenemos un marco de incentivos a la inversión de los más elevados, con un crecimiento demográfico de los más altos de España, una población joven y una importante oferta educativa que va a generar una abundante mano de obra muy cualificada, lo que se une al tradicional dinamismo y vocación comercial de nuestro empresariado.

Y disponemos de algo muy apreciado por los murcianos y, probablemente aún más, por aquéllos que llegan a nuestra tierra a trabajar: un magnífico clima y un hábitat que permite compatibilizar trabajo y ocio en un ambiente agradable.

—*¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía murciana en esta nueva fase de ajuste?*

—Ahora mismo, nuestro gran objetivo es situar a la Región en condiciones de aprovechar toda su potencialidad cuando esta fase de desaceleración finalice y el ciclo económico reanude su etapa alcista. Para ello, el instru-

mento es el Plan de Reactivación Económica que hemos elaborado y discutido con todos los agentes socioeconómicos regionales, y sobre el que se ha conseguido un extraordinario consenso.

Dicho Plan supone un importante esfuerzo financiero que estamos dispuestos a realizar en los próximos años, y para el que necesitamos, y la estamos negociando intensamente, la colaboración de la Administración central y de la Comunidad Europea. Es un Plan que se va a dedicar a continuar y potenciar el esfuerzo para mejorar nuestras infraestructuras; a la promoción de la actividad económica; a realizar importantes actuaciones sobre nuestros recursos básicos y de medio ambiente; y a la formación profesional, tecnológica, empresarial y del capital humano.

**« QUEREMOS CREAR
UN ENTORNO
FAVORABLE PARA
LA ATRACCION
DE NUEVAS EMPRESAS
Y LA MODERNIZACION
DE LAS EXISTENTES »**



Juan Cruz Alli Aranguren
Presidente del Gobierno de Navarra

El Presidente de Navarra, Juan Cruz Alli, se muestra especialmente preocupado por el aumento del desempleo en su comunidad, que define como el principal problema. Considera necesario realizar un esfuerzo en la mejora de las infraestructuras y en la adopción de medidas horizontales de política industrial tendentes a crear un entorno favorable para la atracción de nuevas empresas y para la modernización de las existentes.

Situación y perspectivas de la economía navarra

En un contexto internacional y nacional definido por una ralentización del crecimiento y una pérdida de confianza de los diferentes agentes económicos y sociales en el próximo futuro, los rasgos básicos que han caracterizado a la economía navarra durante el ejercicio de 1992 se pueden sintetizar en: desaceleración de la actividad productiva y de la inversión, caída del número de personas empleadas, generación de déficit en nuestros intercambios comerciales con el exterior, como consecuencia de la rápida expansión de las importaciones y la generación de importantes necesidades de financiación en las cuentas públicas del Gobierno de Navarra, que han obligado a la emisión de deuda pública.

La desaceleración de la actividad ha sido más profunda en el sector de la construcción, tanto en obra civil como en edificación, sin olvidar la caída en el empleo del sector servicios, sector que tradicionalmente, en los últimos años, resultaba generador neto de empleos.

En lo que al sector industrial se refiere, su evolución ha mostrado un perfil irregular, con un comienzo ralentizado que fue mejorando a lo largo del ejercicio, viéndose truncada esta positiva evolución en el cuarto trimestre, en el que han abundado los expedientes de regulación de empleo puestos en marcha por las empresas para hacer frente a las reducciones de sus ventas.

Las primeras estimaciones realizadas de las producciones agrícolas señalan que la producción total será inferior a la de 1991, como consecuencia de la caída de las producciones agrícolas y forestales, frente a un relativo buen comportamiento de la producción ganadera.

Problemas planteados

Podríamos enumerar como problemas más relevantes de la Región: el elevado número de personas que no cuentan con el empleo deseado, la todavía escasa dotación de las infraestructuras más directamente vinculadas a las actividades productivas, los desequilibrios territoriales entre las diversas zonas de la Región y la modernización de los sectores productivos.

El principal problema a que se enfrenta la economía regional es el de dar ocupación a todas las personas que desean trabajo y que en estos momentos no lo tienen. Además, la atonía de la actividad productiva ha implicado una acusada debilidad de la coyuntura laboral, que se ha traducido en una caída de la ocupación y en un aumento del número de personas en paro durante 1992.

Otro desequilibrio de la Región, a pesar de los avances registrados en los últimos años, es la insuficiencia e inadecuación de las infraestructuras necesarias para su desarrollo económico.

De esta forma, en lo relativo a la red viaria, las actuaciones en marcha son: la construcción de la autovía del Norte, que facilitará la conexión con San Sebastián y el Sur de Francia, el desdoblamiento entre Irurzun y Altsasua, o autovía de la Barranca, que permitirá una mejor comunicación con Vitoria, la próxima construcción del túnel de Velate, que mejorará considerablemente la conexión con Francia, así como las actuaciones desarrolladas en la red de interés general, integrada por los itinerarios radiales, que soportan los flujos intrarregionales de mayor importancia, tratando de paliar el inadecuado acceso a las grandes redes de gran capacidad Norte-Sur y a las europeas, así como evitando las deficientes condiciones de accesibilidad dentro de la propia Comunidad.

Al objeto de potenciar la diversificación de las fuentes de energía mediante acciones de apoyo financiero, se está impulsando la ampliación de la infraestructura gasista construida por ENAGAS. La conexión de la Red Nacional de Gaseoductos con la red europea se efectuará por Navarra, y se construirán diversos ramales que permitan el suministro de gas natural a diversas zonas y localidades que carecen de él.

El desarrollo de la Región no se distribuye de manera homogénea en todo el territorio, constatándose una tendencia a su concentración en unos pocos centros que muestran un gran dinamismo (principalmente en torno a la comarca de Pamplona), mientras se produce el despoblamiento de una parte de Navarra y, muy especialmente, de los valles pirenaicos y de la zona media.

A este respecto, el Gobierno de Navarra ha creado el Servicio de Acción Exterior, que centralizará las actuaciones dirigidas al desarrollo de las zonas rurales y desfavorecidas, con una atención prioritaria a los programas cofinanciados por la Comunidad Europea.

Analizando la estructura del sector agrario, se constata la existencia de un excesivo número de explotaciones, con un elevado número de parcelas por explotación. Por ello, es necesario un proceso de concentración parcelaria y una mayor movilidad del mercado de la tierra, que unidos

al fomento del cese anticipado de la actividad, permitan mejorar la estructura productiva del sector. Asimismo, otros retos planteados se refieren a la baja competitividad de determinados subsectores, como el vacuno y los cereales.

La actuación del Gobierno de Navarra persigue la mejora de la competitividad del sector industrial agroalimentario, con especial referencia a los subsectores de conservas vegetales y vitivinícola, así como el apoyo al cooperativismo para que participe más activamente en la comercialización e industrialización de sus productos.

La actividad financiera y tributaria de Navarra se sustenta en el tradicional sistema de Convenio Económico, que permite una amplia potestad tributaria a la Comunidad Foral para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, respetando los tratados internacionales y las competencias de la Administración del Estado, explicadas en el propio Convenio Económico.

Así, el Gobierno de Navarra, además de establecer el volumen y la estructura de los gastos, influye sobre el patrón de distribución de los gastos públicos mediante el desarrollo de una política fiscal que favorece el ahorro e incentiva la inversión.

La aportación del Gobierno de Navarra a la dinámica de mejora de nuestra competitividad industrial se traduce en el desarrollo de un conjunto de medidas horizontales de política industrial tendentes a crear un entorno favorable para el desarrollo de la actividad industrial que permita atraer nuevas empresas y modernizar las existentes, con especial atención a las PYME, y favorecer las innovaciones tecnológicas al objeto de facilitar la integración del sector en el contexto del mercado único europeo.

El rápido crecimiento de los gastos del Gobierno de Navarra durante los últimos años, derivado de la firma de un nuevo Convenio Económico con el Estado y de la asunción de las competencias de Educación, INSALUD e INSERSO, ha coincidido con la realización de un notable esfuerzo inversor por parte de la Comunidad Foral, derivado de la aplicación del Programa de Inversiones Públicas para el trienio 1989-1991, aprobado por el Parlamento de Navarra, lo que ha ocasionado un desequilibrio entre los ingresos y gastos no financieros que ha obligado a emitir 30.000 millones de pesetas de deuda en 1992.

Para el presente año 1993, el proyecto de presupuesto elaborado por el Gobierno de Navarra, que se inscribe en el escenario de consolidación presupuestaria consensuado con la Administración central ante la necesidad de desarrollar una estrategia de convergencia presupuestaria que reduzca los niveles del déficit público para acudir a la tercera fase de la unión económica y monetaria, implica un estancamiento del gasto total en pesetas corrientes con respecto al año anterior.

Este proyecto de presupuestos lleva aparejadas un conjunto de medidas de ajuste tendentes a la reducción del gasto, de tal manera que permita mantener un importante esfuerzo inversor en términos de participación en el PIB regional, así como profundizar en las políticas de bienestar comunitario, tales como sanidad, educación, bienestar social, etcétera.

El Gobierno de Navarra está llevando a cabo una estra-

tegia de situar a nuestra Comunidad en una posición de interrelación con todos aquellos ámbitos de decisión institucional que supongan superar sus reducidos límites y proyectar a Navarra en un contexto interregional, así como impulsar una participación activa de las regiones en la construcción europea.

Esta necesidad de participación puede fundamentarse, al menos, en tres razones: la primera referida al denominado principio de subsidiariedad, por el cual no es necesario centralizar aquellas decisiones que puedan adoptarse más adecuadamente en los niveles de administración más próximos al ciudadano; en segundo término, la participación de las regiones garantiza, de forma más directa, la participación democrática en un proyecto europeo que presenta un notable «déficit democrático» y, en tercer lugar, por resultar más eficaz para la resolución de los numerosos problemas que afectan a los ciudadanos contar con los responsables de cada territorio regional, que tienen un conocimiento más preciso de los problemas a resolver.

La economía regional, en su conjunto, debe hacer frente a los nuevos retos derivados del proceso de realización del mercado interior y de la consecución de la unión económica y monetaria, que se resumen en demandar y exigir una mejora de su competitividad.

A pesar de que este proceso no se produce en un contexto macroeconómico favorable, y a la vista de la capacidad de adaptación mostrada por la economía navarra en los años anteriores, que le ha permitido mantener un elevado dinamismo en su crecimiento y conservar un importante sector industrial, se puede ser moderadamente optimista sobre el futuro económico de Navarra.

« SOMOS PIONEROS EN LA APLICACION DE UNA POLITICA INDUSTRIAL ORIENTADA A CREAR UN MARCO COMPETITIVO GLOBAL »

José Antonio Ardanza Garro
Presidente del Gobierno Vasco

José Antonio Ardanza destaca en sus declaraciones el esfuerzo que desarrolla su gobierno para el desarrollo y la puesta en marcha de una política industrial orientada hacia la creación de un contexto competitivo global para las empresas vascas, en una estrategia de la que afirma que son pioneros en el Estado español. Como gran conclusión señala que la apuesta por la diferenciación y la calidad es la única apuesta posible para hacer frente a la competencia internacional.

Economía vasca: situación y perspectivas

La economía vasca participa, como no podía ser de otra forma, del ambiente económico de incertidumbre y desaceleración que aqueja a la economía mundial desde la crisis de 1990, y que, en el caso español, se ha visto acentuada desde la segunda mitad del año 1992, como consecuencia de las medidas extraordinarias tomadas por la Administración socialista para paliar la inflación y disminuir el déficit público.

Para una economía como la nuestra, eminentemente abierta al exterior y centrada en la producción de bienes intermedios y bienes de equipo, la debilidad de sus principales clientes naturales ha provocado una drástica disminución de las tasas de crecimiento económico en el bienio 1991-1992, habiendo pasado de un índice de PIB del 2,6 en 1991 a un exiguo 0,7 en 1992.

En el caso vasco, además, esta situación de crisis de los mercados externos ha coincidido con el necesario proceso de reconversión de otros sectores básicos de nuestra economía, como son el sector de la siderurgia integral y el de aceros especiales, cuya reordenación definitiva resulta vital para el futuro de Euskadi.

Alguien podría pensar, después de dibujar este preocupante panorama, que a los ciudadanos vascos estos acontecimientos nos han cogido por sorpresa. Nada más lejos de la realidad, como así lo testimonian nuestras anteriores manifestaciones y análisis realizadas sobre las perspectivas de la economía vasca.

En efecto, incluso inmersos en el anterior ciclo económico expansivo —el que transcurrió en el cuatrienio 1986-1989, con tasas de crecimiento que llegaron a ser

superiores a la media del Estado español—, la Administración vasca y los agentes económicos y sociales éramos conscientes de su próximo agotamiento y de la necesidad de acometer una serie de medidas extraordinarias para superar los déficit estructurales que aquejaban a nuestra economía. En este sentido, ya desde 1988, en pleno período de crecimiento, pusimos en marcha un plan extraordinario, denominado Europa'93, para mejorar nuestras infraestructuras y favorecer nuestra integración positiva en Europa. Este plan, recientemente finalizado, ha permitido potenciar la posición estratégica de que goza el País Vasco como eje de conexión entre la Península Ibérica y Europa.

Tampoco nos hemos dejado deslumbrar por los acontecimientos y eventos desarrollados en el Estado español en 1992. Sabíamos, y así lo hemos transmitido constantemente a la sociedad vasca, que las verdaderas dificultades se iban a presentar en el año 1993, como desgraciadamente los hechos se han encargado de ratificar. Esta anticipación, y la interiorización entre los ciudadanos de la necesidad urgente de adaptación de nuestra economía a las nuevas condiciones de competitividad que nos impone la definitiva e inexorable integración en Europa, son las claves que han marcado la actuación de la Administración vasca desde mucho antes del comienzo del actual ciclo depresivo.

1992: un año para la acción

El mítico año 1992 ha sido para nosotros un año muy duro —de febril actividad diría yo— en el desarrollo y puesta en marcha de una política industrial orientada hacia la creación de un contexto competitivo global para las empresas vascas. Una política industrial que, además de ser pionera en el Estado español, ha tenido la virtud de aglutinar una serie de programas sectoriales —tecnológicos, infraestructurales, educativos— y de coordinar la actuación de las diferentes instituciones —Gobierno Vasco y diputaciones forales— y agentes económicos y sociales en torno a un objetivo común para la modernización económica y social del País Vasco.

Este Plan Marco de Actuación Industrial, ratificado por el Parlamento Vasco el pasado mes de febrero, ha supuesto el desarrollo de una serie de programas, muchas veces singulares en Europa, que se han agrupado en torno a los siguientes vectores de actuación:

— El rescate y saneamiento de empresas en dificultades y la consolidación del proceso de reordenación de sectores industriales básicos de nuestra economía, como la siderurgia o los aceros especiales. Con este objetivo, y a través de un programa especial —el denominado Plan 3R—, el Gobierno Vasco, en 1992, ha canalizado 46.000 millones de pesetas en subvenciones y avales para facilitar el rescate, la reestructuración y la reorientación laboral de más de un centenar de empresas en dificultades.

— La promoción y captación de nuevos proyectos de inversión de carácter estratégico para Euskadi, a cuyos efectos se ha creado el Programa Garapen, que aglutina todas las ayudas prestadas por las administraciones vascas,

las cuales se coordinan a través de una oficina estratégica que actúa a modo de «ventanilla única» para su aplicación.

— La incentivación económica territorial mediante la creación de sociedades públicas específicas para la dinamización económica de aquellas zonas especialmente castigadas por la reconversión industrial.

— La aplicación de una serie de medidas horizontales de fomento de la calidad y modernización tecnológica del tejido industrial vasco, configurándose asimismo, en 1992, el Ente Vasco de Tecnología y el Consejo Vasco de Tecnología, lo que ha permitido aglutinar la oferta tecnológica de los siete centros de investigación tutelados existentes en Euskadi.

— El fomento de la competitividad global de *clusters*, o grupos de empresas de carácter estratégico para el País Vasco, como la máquina-herramienta, el acero de valor añadido, los grandes electrodomésticos, los componentes de automoción y la aeronáutica.

— La mejora y modernización de nuestras infraestructuras básicas de comunicaciones y telecomunicaciones gracias a la ejecución del plan extraordinario Europa'93.

— La puesta en marcha de una serie de instrumentos financieros para reducir el coste de los créditos destinados a inversiones del sector industrial, mediante un programa de bonificación de los tipos de interés de las inversiones productivas, la potenciación de las sociedades de capital-riesgo y de garantía recíproca que operan en nuestra comunidad y la constitución de una sociedad de créditos participativos.

— La internacionalización y apertura al mercado a través del desarrollo de actuaciones conjuntas entre la Administración y las empresas vascas para potenciar sus redes de comercialización en el exterior, mediante la creación de consorcios de exportación y la participación activa en ferias y misiones comerciales.

— Por último, y quizá lo más importante, el esfuerzo continuado y decidido en la mejora y capacitación de nuestros recursos humanos a través de programas de formación en alternancia y programas de reciclaje y especialmente dirigidos a jóvenes, a trabajadores en activo y a desempleados.

Un esfuerzo de adaptación permanente

Por supuesto, las actuaciones anteriormente mencionadas sólo representan un paso más, un punto y seguido en el largo proceso de modernización económica que Euskadi viene desarrollando con especial intensidad desde la recuperación del concierto económico con el Estado y de nuestras instituciones propias. Han transcurrido casi dieciocho años de esfuerzos permanentes en la superación de los déficit estructurales que se pusieron de manifiesto con motivo de la crisis energética de 1975. Este proceso ha supuesto una selección constante de empresas y sectores. En la actualidad, podemos confirmar que nuestro tejido industrial no se parece mucho al existente en aquella época. No obstante, somos conscientes de que nos encontramos ante un proceso de adaptación permanente

en el que lo único constante es la necesidad de cambio y que con este espíritu debemos afrontar los retos inmediatos y las debilidades aún pendientes de la economía vasca.

Los retos inmediatos

Quizá de entre todos los problemas que debemos afrontar, podríamos señalar las siguientes prioridades que catalizan nuestra actuación inmediata:

1) *Finalizar los procesos de reconversión pendientes y consolidar las empresas y sectores competitivos.*

Euskadi apuesta por el futuro desde la industria. Desde esta perspectiva, la prioridad más urgente consiste en cerrar definitivamente el proceso de saneamiento de nuestras actividades industriales básicas más representativas. De forma paralela, se intensificará la aplicación de un programa de competitividad global para la consolidación de aquellos sectores y *clusters* de empresas que se han identificado como estratégicos y con suficientes fortalezas para afrontar las exigencias del mercado internacional.

2) *La reactivación económica y la disminución del desempleo.*

La preocupación inmediata de la sociedad vasca es reducir los elevados índices de paro que estamos soportando. Aún siendo conscientes de que no se trata de un objetivo alcanzable a corto plazo, además de todos los programas de actuación que conforman el Plan Marco de Actuación Industrial anteriormente citado, el Gobierno Vasco y las diputaciones forales hemos firmado el pasado 6 de abril un acuerdo institucional de carácter extraordinario, que recoge un conjunto de 33 medidas de «choque» para la reactivación económica y el empleo en los ámbitos fiscal, financiero, industrial, del mercado de trabajo y de la formación profesional. Este plan extraordinario contempla, además, un fondo especial de 40.000 millones de pesetas para la realización de obras públicas generadoras de empleo y para un programa de creación directa de empleo.

Deficiencias estructurales que aún subyacen

Además de afrontar los retos inmediatos a los que he aludido anteriormente, debemos mantener, e incluso intensificar, el esfuerzo por superar una serie de debilidades y deficiencias estructurales que suponen un lastre para la recuperación económica de Euskadi. Resultan bien conocidas de todos nosotros porque quizá llevamos conviviendo con ellas demasiado tiempo, pero siempre resulta oportuno subrayar las más significativas. Me estoy refiriendo a la escasa diversificación de nuestro tejido productivo, que continúa especializado en sectores maduros a escala mundial. De forma paralela, y contrariamente a lo que está sucediendo en otras economías regionales europeas, sigue siendo insuficiente el protagonismo del sector servicios dentro de la estructura económica vasca. Quizás este es nuestro reto más permanente. Sólo si somos capaces de superar la «Edad de Hierro», e incorporarnos en la nueva era de la información, los servicios empresariales cualificados, los productos tecnológicamente avanzados

y los denominados «nuevos materiales» habremos traspasado el umbral de la siguiente revolución industrial, en la que ya estamos inmersos.

La industria vasca, cuya gestión se ha orientado tradicionalmente hacia los sectores productivos, adolece también de fuertes carencias en el área comercial, presta insuficiente atención al diseño y al *marketing*, y a menudo basa solamente en los precios su estrategia internacional, cuando ésta existe. En una economía cada vez más interdependiente, la escasa internacionalización de nuestras empresas constituye un factor de debilidad en un momento en el que hay que simultanear acciones de conquista de mercados foráneos con la defensa de la cuota ganada en el mercado español, fuertemente apetecido por la competencia europea.

El nivel de desarrollo tecnológico es otro de los ámbitos en los que habitualmente se ha considerado al País Vasco como deficitario en relación con otras regiones europeas. Aunque esta situación se ha modificado sustancialmente en la década de los ochenta, aún resta mucho terreno por avanzar. La apuesta por la diferenciación y la calidad es la única estrategia posible para desmarcarnos de la competencia creciente de los nuevos países industrializados y desarrollar una política de diferenciación y servicio al cliente en el mercado europeo. Afortunadamente, este es un objetivo claramente definido y cuya consecución resulta prioritaria para la Administración y las empresas vascas.

En todos los elementos y debilidades apuntados anteriormente subyace la insuficiente dimensión de las industrias vascas para abordar estos problemas con garantías de éxito. El entramado industrial vasco está formado por numerosas pequeñas y medianas empresas que, aunque encuentran serias dificultades para afrontar el nuevo mercado interior europeo, no recurren habitualmente a la cooperación industrial. Este hecho y la ausencia de grupos empresariales sólidos que sustituyan a los sectores hasta ahora trópicos de la economía vasca —siderurgia y naval básicamente— reducen enormemente nuestra capacidad endógena de desarrollo y reactivación.

Evidentemente, sólo he puesto de manifiesto algunas pinceladas de aquellos problemas que tienen unos rasgos más permanentes en la economía vasca, y hacia cuya superación estamos orientando nuestros esfuerzos desde hace más de una década. En el presente año de 1993, debemos enfrentarnos, además, a un sombrío e incierto panorama económico internacional que añade nuevas amenazas al proceso de adaptación y reordenación industrial que venimos realizando.

Los vascos hemos sido reconocidos por nuestro espíritu de laboriosidad y nuestra capacidad para superar las dificultades. Por eso, frente a la desesperanza ante las actuales circunstancias adversas, debemos oponer la confianza en nuestras propias posibilidades y, sobre todo, el esfuerzo y la responsabilidad individual para afrontarlas.

La capacidad técnica e industrial de nuestros recursos humanos, una cultura empresarial contrastada, una estratégica posición geográfica potenciada por la mejora constante de nuestras infraestructuras de transportes y comunicaciones y, sobre todo, el convencimiento interior de

que el futuro de Euskadi sólo depende de nosotros mismos —desde el primer gerente hasta el último trabajador— son los elementos que nos van a permitir afianzar nuestra posición competitiva en Europa. Porque, en definitiva, siempre hemos sido conscientes de que *no existen soluciones mágicas, no hay recetas milagrosas. Sólo existe un camino para avanzar: trabajar unidos; pero en esta ocasión, además, hay que hacerlo más y mejor que los demás.*

« EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN INDUSTRIAL DESTACA ENTRE LA ATONIA ECONOMICA GENERAL »

José Ignacio Pérez Sáenz
Presidente del Gobierno de La Rioja

El Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, constata en su comunidad la desaceleración económica general y los ajustes que se han producido en los sectores industriales tradicionales como el textil, el calzado y el mueble. En cambio ha observado un aumento notable de la inversión industrial. La escasa dimensión de las empresas, la dificultad para incorporar nuevas tecnologías y la salida de los productos a los mercados exteriores son los tres problemas más relevantes de La Rioja.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo La Rioja en estos momentos?

—Paralelamente a lo que ha sucedido en el entorno nacional e internacional, la economía riojana ha mantenido en el último período el ritmo de desaceleración de la actividad productiva que ha caracterizado los dos últimos años.

Los rasgos más señalados de este ajuste se traducen en el comportamiento del sector exterior, menos dinámico debido a la ralentización de la demanda interna y externa, los nuevos ajustes realizados en el sector industrial, principalmente en los sectores tradicionales (textil, calzado y mueble), y la crisis en el sector de la construcción, donde el paro registrado se ha incrementado en el último año un 35 por 100.

Frente a esta atonía global de la actividad económica del lado de la oferta, un elemento permite mantener un clima de moderado optimismo, y es el volumen de inversión industrial.

En 1992, la inversión creció un 17,9 por 100 respecto a 1991. Si en el período 1987-1989 el total de inversión ascendía a 13.589 millones de pesetas, para el período 1990-1992, son 19.263 millones de inversión.

—¿Cuáles son los principales problemas de La Rioja, sobre todo los que tienen rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—Desde el punto de vista de la estructura productiva, los problemas más relevantes se localizan en la dimensión empresarial, la capacidad para incorporar nuevas tecnologías y la salida de los productos a los mercados exteriores.

Del lado de los servicios, la infraestructura sanitaria y la adaptación de la incipiente Universidad de La Rioja a las necesidades de formación son los dos principales retos planteados a medio plazo.

La protección del medio ambiente es otra de las preocupaciones actuales del gobierno regional, que debe compatibilizar el diseño de una política pública medioambiental con la dirección del sector productivo para que respete la normativa vigente en materia de medio ambiente.

—¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la economía riojana?

—Puntos fuertes podrían ser la localización, menor degradación relativa del medio ambiente y una clase empresarial tradicional.

Puntos débiles: falta de capacidad para ganar cuotas en los mercados exteriores.

Oportunidades: cumplir condiciones para resultar atractivo al capital extranjero.

Amenazas: descuidar el nivel de dotación de los servicios públicos.

—¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía riojana en esta nueva fase de ajuste?

—Ser capaces de detectar a tiempo los nuevos ajustes que pueden producirse en el tejido industrial (actualmente, los ajustes se han producido en las ramas textil, calzado y madera), de tal foma que la política de incentivos regionales tenga correlación con las tendencias futuras de desarrollo de la actividad económica.

Un segundo reto, dadas las características del sector de la construcción como motor de la actividad económica, es ser capaces de articular todos los elementos que influyen en el desarrollo del sector (suelo, licitación oficial...) para evitar que parones repentinos arrastren a la economía y dificulten en mayor medida la adaptación al mercado único europeo.

Por último, conjugar los elementos anteriores con los compromisos adquiridos con la Administración del Estado.

« ESTAMOS MEJOR PREPARADOS QUE EN LOS AÑOS OCHENTA PARA AFRONTAR LA CRISIS »

Joan Lerma i Blasco
Presidente de la Generalidad Valenciana

El Presidente de la Generalidad Valenciana, Joan Lerma, cree que estamos mejor preparados que en los años ochenta para afrontar una situación de crisis. Desde la Presidencia de una comunidad muy activa, en donde la pequeña y mediana empresa privada constituyen la base de la economía, Joan Lerma define la mejora de la competitividad como el principal reto de su gobierno, seguido de la necesidad de aumentar la inversión en infraestructuras y de la resolución del problema de la escasez de agua.

—¿Cuál es el ambiente económico que está viviendo la Comunidad Valenciana en estos momentos?

—Como sucede en el conjunto de España, la situación en nuestra Comunidad es difícil. No podía ser menos, dado el elevado grado de apertura de nuestras empresas, tanto respecto del conjunto de España como respecto del extranjero, y la gran sensibilidad a las oscilaciones de la coyuntura. Según las últimas estimaciones de que disponemos, el último trimestre del año pasado fue el de mayor desaceleración económica desde los primeros años ochenta. De manera que el ambiente económico que se respira en la Comunidad Valenciana, al igual que el del conjunto de España y de Europa, es complicado.

Pero, constatada esta realidad, a la que ni podemos ni debemos sustraernos, creo que lo peor que podemos hacer en estos momentos es dejarnos llevar por el pesimismo y por el abatimiento, porque a nada conducen. Lo que hay que hacer, a mi juicio, es reflexionar sobre la situación en que nos encontramos para intentar encontrar las posibles vías de solución a los problemas que nos aquejan. Las dificultades económicas no deben hacer que perdamos de vista lo más importante, que es la necesidad de continuar en el proceso de mejora de nuestro aparato productivo y de acceso a un mejor y mayor nivel de vida para todos los ciudadanos.

Lo cierto es que si se compara la actual fase recesiva del ciclo —que, por otro lado, es compartida por la mayor parte de los países industrializados del mundo— con la última que atravesamos en nuestro país, y que se puede situar en torno a los años 1982-1984, la situación con que nos encontramos es radicalmente diferente. Así, y por lo que a la Comunidad Valenciana se refiere, hemos aumentado nuestra fuerza de trabajo en más de un 20 por 100

respecto de la que teníamos en 1984, año en el que alcanzamos el nivel más bajo de la década pasada. Producimos un 40 por 100 de bienes y servicios más que en 1983. Estos años han permitido también integrar en mayor medida a la mujer en el mundo del trabajo: mientras en 1983 tan sólo se declaraban laboralmente activas el 29 por 100 de ellas, en estos momentos alcanzan el 38 por 100. Y todo esto lo hemos logrado reduciendo nuestra inflación desde el 15 por 100 de 1982 al 4,7 por 100 de la actualidad.

Por lo tanto, y esta es la idea fundamental que quiero transmitir, tenemos dificultades, y algunas de ellas muy graves, pero no hay que olvidar que hemos conseguido avances muy importantes, y que cuando llegue la recuperación nos encontrará con una economía más saneada, con una fuerza de trabajo más cualificada y con unos empresarios conscientes de lo que significa competir en igualdad de condiciones en cualquier mercado.

—¿Cuáles son los principales problemas de la Comunidad Valenciana, sobre todo los que tienen unos rasgos más permanentes? ¿Qué avances se han registrado en los últimos años para su solución?

—En general, el principal problema con que nos hemos encontrado a lo largo de estos últimos años ha sido la pérdida de competitividad de nuestras exportaciones. Haciendo el análisis para el conjunto de la economía española, desde 1988 hasta mediados de 1992 el deterioro de la competitividad de nuestras exportaciones se puede cifrar en un 18 por 100 (en términos de costes laborales unitarios), tanto frente a la CE como frente a la OCDE. Entrando en los elementos de su determinación, los análisis muestran que este deterioro viene explicado en sus dos terceras partes por el tipo de cambio de la peseta, y el resto por el diferencial de costes laborales unitarios. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el carácter abierto de nuestras empresas, la política de sostenimiento de la moneda (que ha sido necesaria por otros motivos) y el crecimiento de los costes salariales muy por delante del resto de países occidentales y de la productividad nos han creado grandes dificultades.

Pero, de todos modos, el problema frente al que nos encontramos creo que es más profundo y que escapa a la coyuntura reciente. Si algo está dejando claro un momento de dificultades como el presente, es que la competencia basada en los precios, con ser importante, cada vez resulta menos definitoria. Los consumidores valoran cada día en mayor medida elementos como la diferenciación del producto, la garantía del servicio postventa y la calidad o la seriedad en los plazos de entrega. Todo ello requiere la existencia de una cultura de la calidad que es difícil que penetre de forma rápida en nuestro tejido industrial. La existencia de redes comerciales sólidas, de capacidad tecnológica adecuada, de unos recursos humanos dotados de una formación continua, son elementos que favorecen este proceso. La Generalidad está trabajando en su mejora.

El segundo problema que nos preocupa, y sobre el que estamos actuando con especial intensidad, es la dotación de infraestructuras. Las infraestructuras son, por sí mismas, un componente fundamental en la mejora de la productividad empresarial. Haciendo una estimación de la curva

de Aschauer para la Comunidad Valenciana, se obtiene que un 1 por 100 de aumento en el *stock* de capital público se traduce en un 0,53 por 100 de aumento en la productividad. Después del esfuerzo realizado en los últimos años, y especialmente desde 1987, y cuando se terminen de ejecutar los diferentes proyectos que están en marcha, tendremos unas excelentes comunicaciones ferroviarias y carreteras tanto con el resto de España por la Meseta como con Europa por el corredor mediterráneo. Con ello, habremos solucionado un déficit histórico que estaba condicionando nuestro desarrollo.

Finalmente, hay un tercer estrangulamiento tradicional que actualmente está entrando en vías de solución, que es el relativo a la escasez de agua. Nuestra economía, y muy especialmente la agricultura, necesita unas dotaciones de agua que requieren armonizar las inversiones del Estado con las propias. El hecho de que el Plan Hidrológico Nacional contemple el trasvase desde el Ebro, la regulación de los aportes en el trasvase Tajo-Segura, la transferencia de recursos desde el Júcar al Vinalopó, y las aportaciones externas a las cuencas del Júcar y el Segura permiten afirmar que se va a poder resolver el estrangulamiento más importante que tenía la economía valenciana en el umbral del siglo XXI.

—¿Cuáles son los puntos fuertes o débiles, las oportunidades y las amenazas con las que se encuentra, en el momento presente, la Comunidad Valenciana?

—Son dos los principales puntos fuertes con que cuenta la economía valenciana para su desarrollo. El primero es, sin duda, sus recursos humanos. Contamos tanto con la existencia de un empresariado versátil acostumbrado a competir en los mercados exteriores, con capacidad de innovar, como con una fuerza de trabajo que ha sabido desarrollar sus habilidades. La economía valenciana se apoya en un gran número de pequeñas y medianas empresas en las que ni el capital extranjero (con las importantes salvedades de Ford, IBM, y alguna otra) ni la empresa pública han tenido protagonismo especial. Es, en definitiva, la economía de empresa, la economía real, la que nos ha llevado a nuestro actual nivel de desarrollo. Además, existe una gran diversificación empresarial, tanto desde el punto de vista espacial como sectorial, lo que permite una gran versatilidad en momentos de dificultades. La política industrial que hemos emprendido desde la Generalidad ha sido, precisamente, la de aprovechar e impulsar estas capacidades a través, sobre todo, de la red de institutos tecnológicos, del apoyo a la internacionalización y del impulso en la mejora de la comercialización interior y exterior. También estamos haciendo un esfuerzo en materia de formación profesional, que consideramos prioritaria.

El segundo activo o punto fuerte con que contamos es el derivado de nuestra localización geográfica. Estamos situados en el Arco Mediterráneo español, que, con alguna excepción, se ha configurado como la zona de mayor crecimiento económico en los últimos años. Se trata del espacio que agrupa al conjunto de actividades más dinámicas y novedosas de la Europa actual —y que, en cierta manera, está provocando el desplazamiento de la «dorsal europea» hacia el Sur—, que arranca desde el Sureste de

Inglaterra y discurre por el valle del Rin para terminar en el Norte de Italia. En contraposición a las zonas de antigua industrialización, este espacio cuenta con grandes posibilidades potenciales de desarrollo por explotar, basadas tanto en el sector servicios, especialmente el turismo, como en las actividades industriales emergentes. En este sentido, el modelo industrial que estamos impulsando desde la Generalidad encuentra un marco adecuado de aprovechamiento presente y futuro.

También hay puntos débiles en nuestra economía. Por una parte, tenemos el problema del tamaño de nuestras empresas. Si bien hay notables excepciones, la empresa, y en concreto la industria valenciana, tiene que hacer un serio esfuerzo de redimensionamiento ante la perspectiva que se abre dentro del mercado único europeo. Las fusiones, pero también la cooperación interempresarial, deben ser objeto de atención para lograr mejoras en la gestión (comercial, tecnológica, financiera y organizativa) y conseguir mayores cotas de penetración en los mercados, especialmente en un momento difícil como el actual.

Nuestra segunda asignatura pendiente es la excesiva especialización en sectores de demanda débil que muestran reducidos valores en su elasticidad de demanda-venta. Hay que continuar en la línea de la diversificación, de la tecnificación, de la investigación y de la formación como única forma de paliar este déficit.

—*¿Cuáles son los grandes retos u objetivos de la economía valenciana en esta nueva fase de ajuste?*

—Sin duda, el objetivo que nos hemos marcado ha sido el de alcanzar de forma paulatina la convergencia real con nuestros socios europeos, y venimos atendiéndolo desde nuestra incorporación a la Comunidad Europea en 1986. Antes de continuar, me gustaría hacer una precisión en el sentido de que a la Comunidad Valenciana siempre le han ido bien los procesos de apertura de los mercados, y que, desde ese punto de vista, apoyamos firmemente la política del gobierno del Estado en relación con la consecución de los objetivos fijados en el Tratado de la Unión Europea.

Planteamos este apoyo sin reservas a la política de convergencia europea tanto desde el convencimiento político y económico como por razones de pura estrategia de desarrollo. En estos momentos, nuestros intercambios con Europa suponen más de las tres cuartas partes del comercio exterior que realizamos, lo que resulta especialmente importante si tenemos en cuenta que las exportaciones representan en la Comunidad Valenciana el 17 por 100 de la producción, cifra que contrasta con el 11 por 100 del conjunto de España.

En relación con las actuaciones concretas llevadas a cabo desde la Generalidad, ya en el primer Programa Económico Regional de 1984 (PEV I) —es decir, más de dos años antes de la firma del Tratado de Adhesión— se marcaba como objetivo estratégico el de adecuar la economía valenciana a las condiciones derivadas de nuestra integración en la CE. Hemos mantenido ese objetivo en los siguientes instrumentos de planificación que hemos desarrollado.

Por lo tanto, creo que se ha hecho un serio esfuerzo de

información, acompañado de iniciativas específicas, la más importante de las cuales ha sido el Plan de Competitividad, que en el bienio 1991-1992 ha supuesto una inyección de fondos para la mejora de la economía real de 16.000 millones de pesetas. Todo ello acompañado de iniciativas en materia de formación, infraestructuras de todo tipo e impulso tecnológico; esta última, en estos momentos, se concreta en un plan tecnológico a cuatro años. Todas ellas forman un abanico que supone un paso decisivo en nuestra preparación para la mayor competencia. Creo, en definitiva, que los valencianos estamos haciendo frente correctamente a la crisis, y que cuando salgamos de ella estaremos en buenas condiciones de seguir manteniendo nuestro objetivo de llegar a ser una de las regiones más desarrolladas de Europa.